

Desindustrialización, trabajo y violencia en El Salvador

Luis René Cáceres

Resumen

En este trabajo se aborda la manera en que la desindustrialización afecta el mercado laboral de El Salvador. En el análisis se desagregan las variables por género, lo que permite apreciar las diferentes respuestas de mujeres y hombres a la desindustrialización. Los resultados indican que la desindustrialización ha conducido al descenso del empleo de calidad y al aumento del autoempleo, mientras que la participación laboral femenina ha aumentado y la masculina ha disminuido, en paralelo a las reformas económicas que se llevaron a cabo en los años noventa, lo que denota el papel de la mujer a la hora de salvaguardar el bienestar del hogar. Además, la desindustrialización está asociada al incremento de la violencia, ya que contribuye al aumento del empleo de baja calidad. El artículo concluye enfatizando la importancia de restituir la protección arancelaria y apoyar la reindustrialización, la integración regional, la igualdad de género y la educación.

Palabras clave

Desindustrialización, empleo, mercado de trabajo, autoempleo, empleo a tiempo parcial, problemas sociales, violencia, igualdad de género, modelos econométricos, El Salvador

Clasificación JEL

J24, J46, O17, F16

Autor

Luis René Cáceres es Doctor en Economía de la Universidad de Utah (Estados Unidos). Correo electrónico: luisrenecaceres@gmail.com.

I. Introducción

La desindustrialización ha recibido considerable atención en la literatura de las ciencias económicas en las últimas tres décadas¹. Los estudios en los que se han investigado las causas de este fenómeno, por una parte, han señalado razones de origen interno (como las diferencias de productividad entre sectores), así como de tipo externo (como la importación de bienes manufacturados), y, por la otra, han postulado que la causa radica en la sobrevaluación del tipo de cambio, a manera del “mal holandés”, que conduce a la pérdida de competitividad del sector manufacturero.

En los estudios sobre desindustrialización también se ha abordado el análisis de sus repercusiones sociales sobre individuos y comunidades en relación con el desempleo, el subempleo y las dificultades para volver a ingresar al mercado de trabajo (Whyte, 1985; Belcher y DiBlasio, 1993). Otros autores han presentado evidencia de que un evento de desempleo conduce a la pérdida de ingresos a lo largo del ciclo de vida y deja huellas permanentes (Arulampalam, 2001). Además, existe evidencia de las consecuencias del subempleo y el desempleo en cuanto a enfermedades mentales, alcoholismo, depresión y divorcio (Darity y Goldsmith, 1996; Sen, 1997; Dooley, 2003). También se ha mostrado que las personas que han experimentado episodios de subempleo y desempleo tienden a morir a edad más temprana que quienes no han tenido esa experiencia (Junakar, 1991). La desindustrialización conduce no solo al desempleo y al subempleo, sino también al deterioro del bienestar físico y anímico de los individuos y, en términos generales, a problemas de salud pública, al declive de las comunidades y regiones, a la pérdida de capital social y al desencadenamiento de conflictos sociales (Wilson, 1987). Esto obliga a tener presente el alto costo social que la merma de la producción industrial, así como la tercerización (*outsourcing*) y la reducción de plantilla (*downsizing*), pueden representar para un país.

En este trabajo se investiga la manera en que la desindustrialización afecta el comportamiento de determinadas variables del mercado laboral de El Salvador, específicamente el autoempleo, el subempleo, los empleos de calidad y a tiempo parcial, y la participación laboral. El análisis se lleva a cabo desagregando estas variables por género, lo que permite apreciar las diferentes respuestas de mujeres y hombres a la desindustrialización. Como variables independientes, en el análisis se incluyen las remesas como porcentaje del producto, con miras a discernir su papel en el mercado laboral en el contexto de la desindustrialización.

En la sección II de este artículo se aborda el tema de la desindustrialización en El Salvador y en la sección III se plantea una discusión de los datos y sus propiedades estadísticas. A continuación, en la sección IV se presentan los resultados de la estimación de ecuaciones de cointegración que permiten identificar las repercusiones de la desindustrialización en el comportamiento del mercado laboral. En la sección V se explora el papel de la desindustrialización sobre la exclusión social y la violencia. Por último, en la sección VI se detallan las conclusiones.

II. La desindustrialización en El Salvador

El Salvador ha experimentado un proceso de desindustrialización desde mediados de los años noventa, lo que se manifiesta en la caída de la participación del valor agregado del sector manufacturero del 25% en 2001 al 20% en 2013. En el período 1990-2013, la participación del valor agregado del sector agrícola en el producto cayó del 14,6% al 10,84%, en tanto que el sector servicios aumentó su participación en ese período. Este desenvolvimiento ha ido acompañado de una persistente tendencia al estancamiento

¹ En este trabajo, la desindustrialización se define como la caída de la participación del valor agregado del sector manufacturero en el PIB. Las referencias sobre las causas y consecuencias de la desindustrialización que se hacen en esta sección se encuentran en Cáceres (2017).

desde mediados de la década de 1990, con una tasa promedio de crecimiento económico del 1,9%. Cáceres (2017) ha mostrado que la desindustrialización y el estancamiento económico son el resultado de las reformas económicas llevadas a cabo en la primera mitad de los años noventa, especialmente de la drástica reducción de los aranceles a las importaciones, que bajaron del 22,68% en 1986 al 5,80% en 2009, según los datos presentados por Lora (2012). Esto condujo al desplazamiento de la producción manufacturera nacional por el consumo de bienes importados. También se llevaron a cabo otras reformas, en los campos financiero, de pensiones y previsión social, y de privatización. Para medir la intensidad y amplitud de las reformas, Lora (2012) ha presentado un índice general de reformas para los países latinoamericanos en el que se aprecia que el valor correspondiente para El Salvador subió de 0,43 en 1990 a 0,64 en 2009 (el último año comprendido en el estudio). Cáceres (2017) presentó ecuaciones donde se muestran los efectos negativos de la caída del arancel promedio y del aumento del índice general de reformas sobre el crecimiento económico, la inversión y el valor agregado de los sectores de bienes transables como porcentaje del producto.

III. El modelo y los datos

El modelo presentado en este trabajo consiste en la estimación, por métodos de cointegración de ecuaciones que expresan variables del mercado laboral salvadoreño en términos de variación anual, de la participación del valor agregado del sector manufacturero en el producto, el monto anual de remesas como porcentaje del PIB, la tasa anual de crecimiento económico y el índice general de reformas. La fuente de datos son los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial. Todos los datos corresponden al período 1990-2013, excepto cuando se indica lo contrario. La definición de las variables, así como sus valores promedio y desviaciones estándar, se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1
Definición y valores anuales promedio y desviaciones estándar de las variables

Variable	Valor anual promedio	Desviación estándar
AGRIC, participación del sector agropecuario en el PIB	12,53	2,38
MANU, participación del sector manufacturero en el PIB	22,69	1,56
SERV, participación del sector de servicios en el PIB	58,27	2,24
AGRIC+MANU, participación de los bienes transables en el PIB	35,22	2,60
REMY, monto de remesas como porcentaje del PIB	13,81	3,15
GDPGROWTH, tasa de crecimiento económico	3,16	2,29
SEMPFEMALE, tasa de autoempleo femenino	48,75	1,62
SEMPMALE, tasa de autoempleo masculino	37,86	2,12
QUALITYEMPFEMALE, tasa de trabajo asalariado femenino	45,81	5,51
QUALITYSEMPMALE, tasa de trabajo asalariado masculino	61,24	2,96
PARTTIMFEMALE, tasa de participación femenina ^a	44,10	2,22
PARTTIMMALE, tasa de participación masculina ^a	79,96	2,10
ARANCEL PROMEDIO, por ciento ^b	8,66	3,58
INDICEGENERAL, índice general de reformas ^b	0,57	0,07
HOMICIDES, número de homicidios por cada 100 000 habitantes	23,4444	21,7817
REMITT, monto anual de remesas dividido entre el PIB	13,8142	3,1456
ESTADODERECHO, índice de Estado de derecho	-0,4771	0,6541
IOH, índice de oportunidad humana	74,1177	14,3696
SHADOW, dimensión de la economía subterránea dividida entre el PIB	30,57	7,42
Q5Q1, cociente entre la porción del ingreso nacional destinado al quinto quintil y el porcentaje recibido por el primer quintil	16,18	5,16
GASTO SOCIAL, monto de gasto social per cápita	780,69	681,61
GENDERINEQUALITY, índice de desigualdad de género	0,4340	0,0523
ADOLESFERTILITY, fertilidad de adolescentes	70,7647	21,2622

Fuente: Elaboración propia.

^a Datos del período 1993-2013.

^b Datos del período 1990-2009.

Todas las variables fueron objeto de pruebas de raíz unitaria por medio del cómputo del estadístico ADF, con resultados que indican que todas eran integradas de orden uno, con la excepción de las tasas de autoempleo femenino y masculino. Las pruebas de raíz unitaria se presentan en el anexo 1. Con miras a detectar la existencia de cointegración se recurrió a la prueba de Johansen, que indicó que en todas las ecuaciones que se estiman a continuación las variables estaban cointegradas. Por tanto, las estimaciones se llevaron a cabo con el método de mínimos cuadrados completamente modificados (Phillips y Hansen, 1990) para tomar en cuenta el hecho de que en un vector de cointegración todas las variables son endógenas.

1. Desindustrialización y autoempleo

A continuación, se analiza el impacto de la desindustrialización sobre la tasa de autoempleo; esta tasa se usa generalmente como una medida de la economía informal o subterránea (Loayza, 1997; Loayza y Rigolini, 2011). Cáceres y Cáceres (2017a) han informado que los principales determinantes del autoempleo en una muestra de seis países de América Latina eran la tasa de crecimiento económico y las remesas como porcentaje del PIB. En este trabajo se usan estas dos variables —además del cambio en la participación de la industria manufacturera en el producto, D (MANU), y de la variable cualitativa CUALI1, que representa la caída del PIB en 2009— como determinantes del autoempleo en El Salvador. Los resultados se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2
Determinantes de la tasa de autoempleo
(Variable dependiente: tasa de autoempleo)

VARIABLES INDEPENDIENTES	Femenino	Masculino
Constante	51,4940 (37,15)	47,9516 (21,48)
D (MANU)	-1,6588 (3,70)	-1,5416 (2,15)
GDPGROWTH	-0,2620 (2,17)	-0,3710 (1,91)
REMY	-0,1877 (2,28)	-0,6812 (5,16)
CUALI1	5,8842 (5,00)	7,4984 (3,95)
R cuadrado	0,8000	0,7400

Fuente: Elaboración propia.

El coeficiente de D (MANU) es negativo y significativo en los casos del autoempleo femenino y masculino, de manera que se puede inferir que la desindustrialización contribuye al crecimiento de la economía informal. El alto valor del coeficiente de D (MANU) en la ecuación para el autoempleo femenino se puede asociar con la evidencia de que las mujeres son más susceptibles que los hombres a desempeñarse en empleos de baja calidad (Lichter y Landry, 1991). En varios estudios se ha presentado evidencia del aumento desmedido del autoempleo y el subempleo en los Estados Unidos ante el cierre de empresas industriales (Belcher y DiBlasio, 1993), mientras que en una muestra de países desarrollados y en desarrollo, Pietrobelli, Rabellotti y Aquilina (2004) encontraron que, a medida que aumentaba el grado de industrialización, la tasa de autoempleo tendía a caer. En el mismo sentido, Acs, Audretsch y Evans (1992) han dado cuenta de que el autoempleo tendía a aumentar en una muestra de países desarrollados y en desarrollo de manera paralela a la caída de la importancia del sector manufacturero en el PIB.

El aumento de la tasa de crecimiento económico ejerce un impacto negativo en el autoempleo femenino y masculino, lo que indica que el dinamismo económico genera oportunidades de empleo de

calidad para los autoempleados en la economía oficial. Esto concuerda con la evidencia presentada por Cáceres y Cáceres (2017a) de que el crecimiento económico tiene un efecto negativo sobre la tasa de autoempleo en una muestra de datos de panel del período 1993-2012 de seis países de la región.

Las remesas muestran coeficientes significativos y negativos en ambos casos, lo que implica que constituyen una fuente de liquidez que permite a mujeres y hombres salir del autoempleo. Esto coincide con el resultado de Cáceres y Cáceres (2017a) de que el aumento del salario real, que representa una inyección de liquidez similar a las remesas, reduce el autoempleo femenino y masculino.

2. Desindustrialización y empleo de calidad

Se analizó también el papel de la desindustrialización sobre la tasa de empleo de calidad, que, según la definición de los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco Mundial, es aquel empleo con salarios y beneficios establecidos. Los resultados de la estimación de ecuaciones de cointegración con datos del período 1993-2012 se presentan en el cuadro 3. Se puede observar que los coeficientes de D (MANU) son positivos, lo que indica que la desindustrialización ejerce efectos negativos sobre el empleo de calidad, particularmente sobre el femenino. El coeficiente de GDPGROWTH, correspondiente al empleo de calidad femenino, es positivo y significativo, mientras que en el caso del empleo de calidad masculino, el coeficiente no es significativo. Se podría deducir, entonces, que las mujeres son más susceptibles que los hombres a la trayectoria del ciclo económico. Esto indica que el impacto del dinamismo económico sobre el empleo de calidad femenino difiere según se trate de la economía formal (aumenta el empleo de calidad femenino) o de la economía subterránea (reduce el autoempleo femenino y masculino), lo que podría implicar la existencia de mercados laborales fragmentados. Las remesas muestran coeficientes positivos y significativos en ambos casos, lo que apunta a su papel tanto en la reducción del empleo en la economía subterránea (véase el cuadro 2) como en el aumento del empleo en la economía oficial, la del empleo de calidad (véase el cuadro 3).

Cuadro 3
Determinantes de la tasa de empleo de calidad
(Variable dependiente: tasa de empleo de calidad)

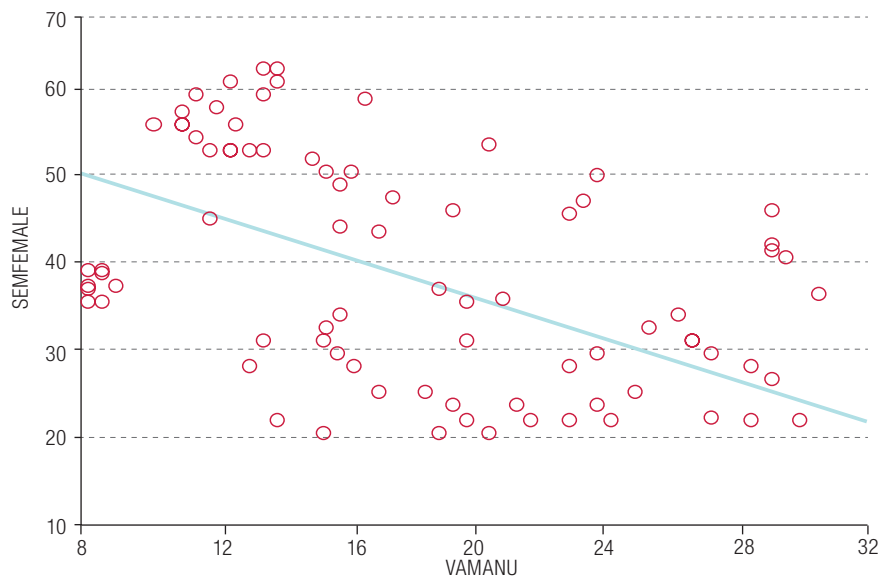
Variables independientes	Femenino	Masculino
Constante	22,7123 (3,48)	50,5396 (23,18)
D (MANU)	7,6244 (3,66)	1,9188 (2,76)
GDPGROWTH	1,4903 (2,31)	0,1031 (0,48)
REMY	1,4243 (3,70)	0,7737 (6,02)
CUALI1	11,6427 (2,01)	-7,8340 (4,05)
R cuadrado	0,31	0,71

Fuente: Elaboración propia.

Para enfatizar los resultados que se registran en los cuadros 2 y 3, en los gráficos 1 y 2, tomados de Cáceres y Cáceres (2017a), se muestran, respectivamente, la caída del autoempleo femenino (SEMFEEMALE) y el aumento del empleo de calidad femenino (SALARYWFEMALE) ante el aumento de la participación del sector manufacturero en el producto (VAMANU), en una muestra de seis países de la región, con datos de panel de 1993-2012².

² Los países son: Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica y República Dominicana.

Gráfico 1
Caída del autoempleo femenino a medida que aumenta la industrialización



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2
Aumento del empleo asalariado femenino a medida que aumenta la industrialización



Fuente: Elaboración propia.

Los gráficos 1 y 2 podrían interpretarse como evidencia adicional de que la industrialización conduce a la merma del autoempleo femenino y al aumento del empleo de calidad femenino.

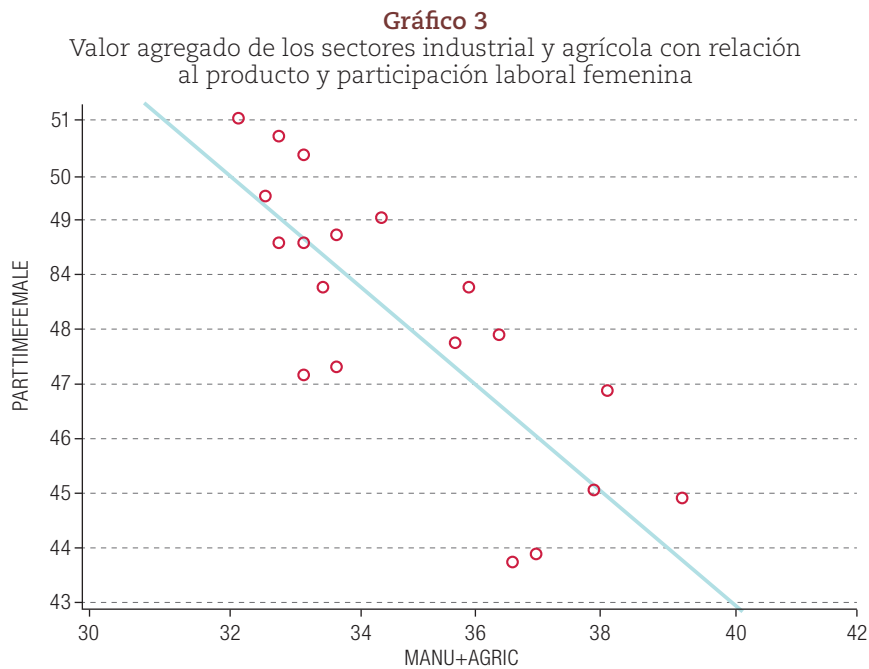
3. Desindustrialización y participación laboral

En algunos estudios recientes se ha puesto en evidencia que en los países de América Latina la participación femenina obedece al comportamiento del “trabajador adicional”, lo que significa que las mujeres entran al mercado de trabajo ante el desempleo del jefe de hogar o situaciones adversas que inciden de manera negativa en el bienestar del hogar (Cáceres y Cáceres, 2017a)³. Este es un fenómeno que no se observa en los países desarrollados, en los que existen amplias redes de protección social, en especial el seguro de desempleo. Una consecuencia para los países latinoamericanos es que esto puede obligar a hijas e hijos a tomar el lugar de las madres en las tareas domésticas o puede, eventualmente, llevar a que las hijas e hijos tengan que abandonar la escuela si la madre no logra encontrar empleo, lo que repercute en la transmisión de la pobreza de una generación a otra (Cáceres, 2014)⁴. Es decir que los desajustes económicos y sociales resultantes de la desindustrialización, que han sido identificados por varios autores (Wilson, 1987; Belcher y DiBlasio, 1993; Pietrobelli, Rabelotti y Aquilina, 2004), podrían hacer que la mujer se convierta en la “red de protección social”, en ausencia de otras medidas institucionales de protección. Por tanto, se puede esperar que exista una relación negativa entre la producción de bienes transables y la participación laboral femenina. Esta relación se observa en el gráfico 3, donde se sugiere que las mujeres tenderían a entrar al mercado laboral, a buscar empleo, ante las tendencias de estancamiento económico resultado del decrecimiento relativo de los valores agregados de los sectores manufacturero y agrícola. Hay que señalar que en la economía salvadoreña el sector manufacturero es el que ejerce mayores efectos sobre el crecimiento económico, mientras que el impacto del sector de servicios es negativo (Cáceres, 2017). Además, como se apuntó anteriormente, desde mediados de los años noventa, la economía salvadoreña experimenta una persistente tendencia al estancamiento.

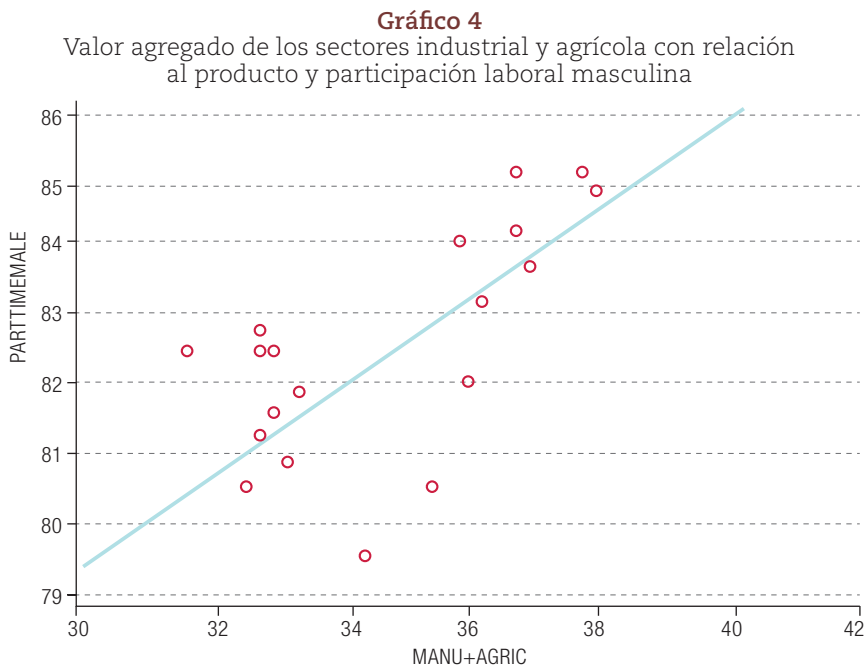
Como se observa en el gráfico 4, la participación masculina muestra un comportamiento contrario. Esto podría denotar que, ante la contracción relativa de los sectores de bienes transables, los hombres optan por alejarse del mercado laboral, dentro del marco del fenómeno del “trabajador desanimado” (*discouraged worker*) (Borjas, 2008).

³ Se han presentado datos sobre la existencia de este fenómeno en otros países latinoamericanos como la Argentina (Cerruti, 2005) y México (Mckenzie, 2003).

⁴ En los Estados Unidos, la deserción escolar ante la caída del ingreso familiar se pone en evidencia en un artículo de *The Washington Post* (2015) donde se apunta que, sobre la base de datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2008-2012, investigadores del Urban Institute hallaron que casi un tercio de los 563.000 adolescentes que abandonaron la escuela secundaria la dejaron para trabajar. En esta población de jóvenes de 16 a 18 años había una cantidad desproporcionada de hombres e hispanos que dieron por terminada su educación formal ya sea al comienzo de la escuela secundaria o casi al final. En promedio, lo que estos adolescentes ganaban representaba casi la cuarta parte del dinero que sus familias necesitaban para vivir, y ese dinero evitó que un 42% de los hogares cayeran por debajo de la línea de pobreza. En el estudio se concluye que, ante el estancamiento del ingreso y la desaparición de muchos empleos manuales e industriales bien remunerados, más familias de bajos ingresos pueden necesitar que más integrantes del hogar salgan a trabajar para mantenerse a flote (pág. A11).



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

La estimación de ecuaciones de cointegración, que expresan las tasas de participación laboral en términos de porcentajes del valor agregado de los sectores de bienes manufacturados y agrícolas en el PIB, arrojó los resultados que se muestran en el cuadro 4.

Cuadro 4
Determinantes de la tasa de participación laboral
(Variable dependiente: tasa de participación laboral)

Variables independientes	Femenina		Masculina	
Constante	73,7867 (4,72)	30,0552 (10,17)	59,4692 (5,06)	105,4692 (24,17)
CUALI1	1,6115 (0,46)	1,2542 (1,46)	3,5272 (2,18)	1,9775 (1,56)
REMY	0,0070 (0,03)			-0,0080 (0,96)
MANU+AGRIC	-0,8517 (2,15)			0,5341 (1,78)
INDICEGENERAL		23,7353 (4,80)		-43,9743 (6,01)
R cuadrado	0,60	0,66	0,63	0,71

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que estas ecuaciones explican entre un 60% y un 71% de la variabilidad de la participación femenina y masculina, y que las remesas muestran coeficientes no significativos.

El coeficiente de MANU+AGRIC es negativo y significativo en el caso de la participación femenina, lo que indica que la desindustrialización y desagriculturalización contribuyen al aumento de la participación femenina, ya que más mujeres entran al mercado laboral para paliar el desajuste del bienestar del hogar ante la contracción de los sectores productivos.

En el caso de la participación masculina, el coeficiente de la variable MANU+AGRIC es positivo y marginalmente significativo, lo que implicaría que ante la desindustrialización y desagriculturalización los hombres se vuelven “desanimados” y podrían optar por salir del mercado laboral. La inactividad masculina también podría obedecer a que los hombres cuentan con su propio sistema de “seguro de desempleo”, que descansa en el papel de “bombera” o “salvavida” que desempeña su esposa o compañera. La inactividad también puede reflejar la opción de los hombres de emigrar.

Se debe observar que el coeficiente de la variable MANU+AGRIC correspondiente a la participación femenina (-0,8517) es, en términos absolutos, casi el doble del coeficiente de esta variable en el caso de la participación masculina (0,5341); la interpretación podría ser que las mujeres responden de manera más ágil al deterioro del bienestar del hogar (ante la desindustrialización y el lento crecimiento económico), fieles a su misión de buscar la solvencia de dicho hogar.

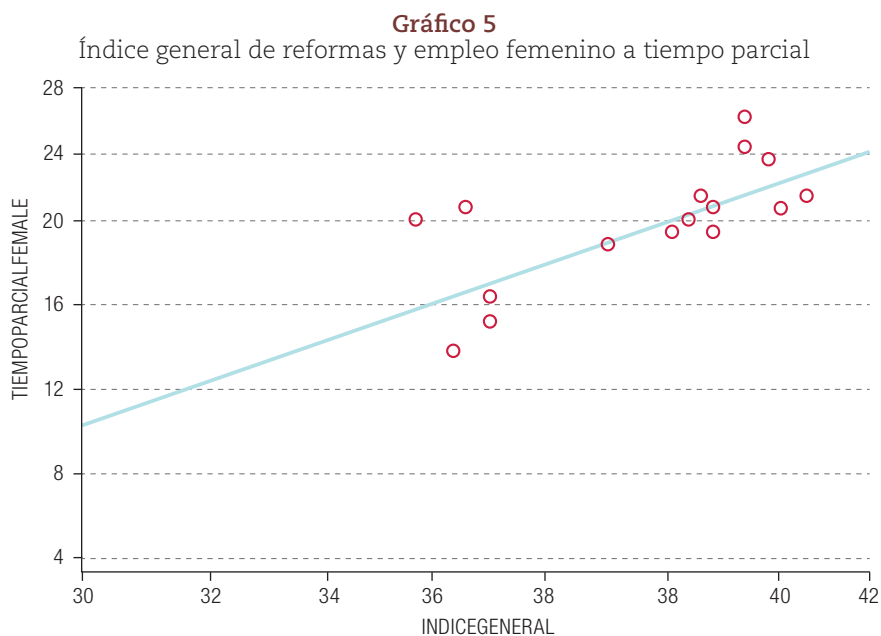
En el cuadro 4 también se muestran los resultados de la estimación de dos ecuaciones en las cuales la variable independiente era INDICEGENERAL, o sea el índice general de reformas, cuyos coeficientes resultaron positivo para la participación femenina y negativo para la participación masculina. Ello indicaría que el proceso de reformas dio lugar al aumento de la participación femenina, en respuesta a la tendencia al estancamiento económico que este proceso ha generado, y al propósito de las mujeres de salvaguardar el hogar. El coeficiente negativo de la participación masculina podría indicar que, ante el desajuste provocado por las reformas, los hombres optaron por retirarse del mercado laboral, amparados por la protección del autoempleo femenino. Se debe observar que el índice general de reformas explica, por sí solo, el 66% y el 63% de la varianza de la participación laboral femenina y masculina, respectivamente.

Cabe recalcar que entre 2015 y 2016, el comportamiento del mercado laboral de la región mostró una relación con las situaciones observadas en El Salvador en cuanto al fenómeno del “trabajador adicional”, específicamente la reducción del empleo de calidad y el aumento del autoempleo ante la

caída del producto real⁵ —caracterizada por un marcado descenso del sector manufacturero—, y la reducción de la participación masculina y el aumento de la participación femenina⁶.

IV. Trabajo a tiempo parcial

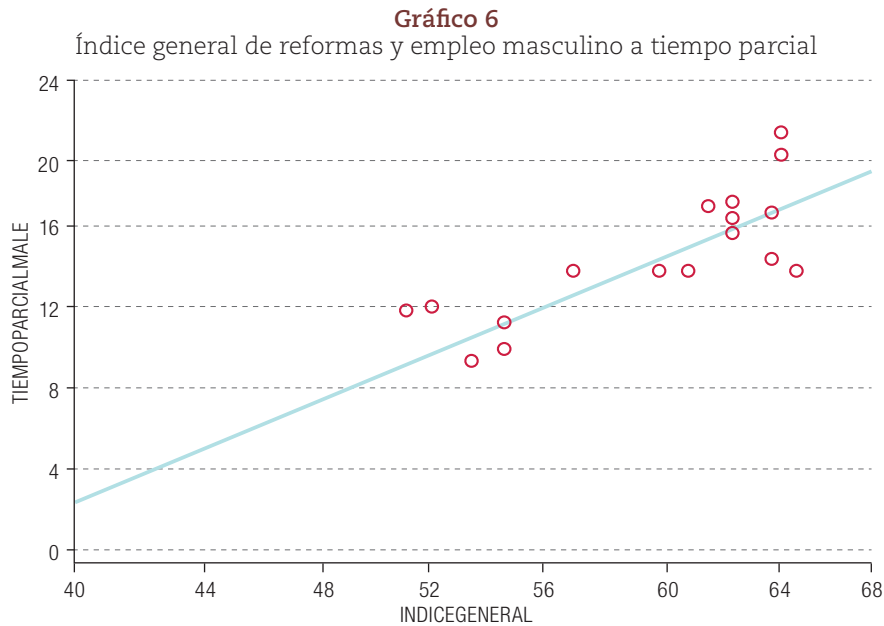
Llama la atención la estrecha asociación entre el índice general de reformas y las tasas de empleo femenino y masculino a tiempo parcial (véanse los gráficos 5 y 6). Esto muestra la tendencia ascendente del subempleo a medida que se fueron implementando las reformas.



Fuente: Elaboración propia.

⁵ Al respecto, la CEPAL (2016) señala que: “Sobre la base de la información de 11 países, se estima que, en concordancia con la contracción del producto regional y la debilidad correspondiente de la demanda laboral de las empresas, el número de trabajadores asalariados habría caído levemente (-0,2%). En contraste, el trabajo por cuenta propia continuó mostrando un comportamiento contracíclico pronunciado y aumentó un 2,7%” (pág. 62).

⁶ Con relación a la caída del empleo en 17 países de la región, la CEPAL (2016) apunta que: “[...] el incremento de la tasa de desocupación es de 0,5 puntos porcentuales como promedio de los primeros tres trimestres de 2016. [...] este incremento fue más marcado en el caso de las mujeres que en el de los hombres (0,7 frente a 0,3 puntos porcentuales), de manera que se amplió la brecha que existe con respecto a esta variable entre los géneros” (pág. 61). “Por otra parte, fueron diferentes los procesos que conllevaron aumentos de las tasas de desocupación de hombres y de mujeres. En el caso de los hombres, el factor decisivo fue la caída de la tasa de ocupación, cuya magnitud superó la baja de la tasa de participación. En contraste, en el caso de las mujeres predominó el incremento de la tasa de participación, mientras que la tasa de ocupación se mostró estable [...]” (pág. 62).



Fuente: Elaboración propia.

Se estimaron ecuaciones de cointegración que expresan el empleo a tiempo parcial en términos del índice general de reformas, cuyos resultados se muestran en el cuadro 5. Se observa que en ambas ecuaciones los coeficientes del índice son significativos y positivos, y que las ecuaciones explican, respectivamente, el 44% y el 53% de la varianza del empleo a tiempo parcial.

Cuadro 5
Índice general de reformas y empleo a tiempo parcial
(Variable dependiente: tasa de empleo a tiempo parcial)

VARIABLES INDEPENDIENTES	Femenina	Masculina
Constante	-5,1286 (0,62)	-16,733 (2,30)
INDICEGENERAL	41,9871 (3,01)	50,1177 (4,09)
R cuadrado	0,44	0,53

Fuente: Elaboración propia.

Otras ecuaciones se estimaron controlando por la desindustrialización y el crecimiento económico e incluyendo como variables independientes las tasas de desempleo femenino y masculino, dada la evidencia de que el desempleo es uno de los principales determinantes del empleo a tiempo parcial (Cáceres y Cáceres, 2017a). Los resultados del cuadro 6 indican que, aun cuando se incluyen estas variables adicionales, los coeficientes del índice de reformas son significativos y positivos, y de mayor dimensión en el caso del subempleo femenino. Los coeficientes de D (MANU) resultaron significativos y negativos en el caso del subempleo femenino, pero insignificantes en el desempleo masculino, lo que da cuenta de que la desindustrialización ha contribuido al aumento del empleo a tiempo parcial femenino.

En el caso de la ecuación del subempleo femenino, los coeficientes de las tasas de desempleo femenino y masculino resultaron significativos y positivos, lo que indica que ante un aumento del desempleo, ya sea femenino o masculino, las mujeres optan por recurrir al empleo a tiempo parcial. Sin embargo, en el caso del subempleo masculino, los coeficientes del desempleo femenino y masculino resultaron no significativos, lo que podría denotar cierta renuencia de los hombres al subempleo.

Cuadro 6
Determinantes del empleo a tiempo parcial
(Variable dependiente: tasa de empleo a tiempo parcial)

Variables independientes	Femenina	Masculina
Constante	-68,8701 (10,25)	53,1577 (3,35)
INDICEGENERAL	116,0061 (9,22)	92,1577 (4,75)
D (MANU)	-0,9102 (5,48)	-0,7896 (1,11)
UNEMFEMALE	2,3188 (5,48)	1,0178 (1,56)
UNEMMALE	0,6605 (2,13)	0,5921 (1,24)
GDPGROWTH	0,5000 (3,57)	0,3865 -1,8
R cuadrado	0,80	0,68

Fuente: Elaboración propia.

Llama la atención que, en el caso del empleo a tiempo parcial femenino, el coeficiente de la tasa de crecimiento económico es significativo y positivo, lo que es contrario a lo esperado y podría indicar que el dinamismo económico abre oportunidades de empleo a las mujeres, pero a tiempo parcial. En el caso del empleo a tiempo parcial masculino, el coeficiente de la tasa de crecimiento económico resultó positivo y marginalmente significativo. Esto indica que el ciclo económico tiene especial incidencia sobre las mujeres en cuanto a su participación en el subempleo⁷. Se debe señalar que en El Salvador no existe ninguna disposición legal sobre el empleo a tiempo parcial. Cáceres (2014) presentó resultados que muestran que en los países latinoamericanos el empleo a tiempo parcial resulta de la tendencia decreciente del producto y es un indicador adelantado del desempleo.

1. Comercio intracentroamericano, autoempleo y empleo de calidad

Con el propósito de detectar el impacto del comercio intracentroamericano en el mercado laboral salvadoreño, se estimaron ecuaciones de cointegración, incluida la variable EXPCAY, que mide el agregado de las exportaciones salvadoreñas hacia los otros países centroamericanos como porcentaje del producto. En estas ecuaciones se identifica el papel de esta variable sobre las tasas de autoempleo y de empleo de calidad, femenino y masculino. Los resultados se muestran en el cuadro 7. En estas ecuaciones se puede observar que todas las variables incluidas en las estimaciones presentadas en los cuadros 5 y 6 continúan siendo significativas y teniendo los signos esperados.

En las ecuaciones para las tasas de autoempleo femenino y masculino, la variable EXPCAY tiene coeficientes con signos positivos, pero son insignificantes, lo que denota que el comercio intracentroamericano no incide en el autoempleo femenino o masculino, es decir, no agrava ni disminuye la problemática de la economía subterránea. De especial importancia son los resultados con relación al empleo de calidad, ya que la variable EXPCAY tiene coeficientes positivos y significativos, lo que permite deducir que la integración centroamericana ha contribuido a la generación de empleos

⁷ Existe evidencia de que el aumento del empleo a tiempo parcial conduce a la reducción de la productividad laboral (Cáceres y Cáceres, 2017b). La caída de la productividad contribuiría al descenso del dinamismo económico y del valor agregado del sector manufacturero, y, por tanto, al incremento del empleo a tiempo parcial, lo que podría dar lugar a una trampa de subempleo.

de calidad para mujeres y hombres, un objetivo cuyo logro ha sido elusivo en la región. Cabe apuntar que las exportaciones de El Salvador hacia los otros países de Centroamérica constituyeron en 2015 un 48% del total de las exportaciones (el porcentaje más alto de los países centroamericanos) y que cerca del 80% de dichas exportaciones están constituidas por bienes manufacturados.

Cuadro 7
Autoempleo, empleo de calidad y exportaciones hacia Centroamérica

Variables independientes	Variable dependiente: autoempleo		Variable dependiente: empleo de calidad	
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino
Constante	50,1849 (64,98)	46,8954 (30,68)	21,0028 3,79)	40,1305 (13,35)
D (MANU)	-1,3139 (3,34)	-1,3549 (2,02)	5,2474 (2,83)	2,9566 (2,94)
GDPGROWTH			1,9383 (3,45)	0,8460 (2,77)
REMY	-0,2262 (2,57)	-0,8113 (4,66)	0,2068 (0,44)	0,3816 (1,51)
CUALI1	7,6687 (12,12)	9,3378 (7,85)	11,8488 (2,45)	0,7942 (0,30)
EXPCAY	0,2105 (1,33)	0,3649 (1,17)	2,9190 (2,83)	1,2879 (2,79)
R cuadrado	0,80	0,78	0,48	0,53

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que las corrientes comerciales hacia el resto de Centroamérica tienen mayor impacto en el aumento del empleo de calidad femenino respecto del masculino (los coeficientes son 2,9190 y 1,2879, respectivamente). Es decir que, la integración regional, contraria a la apertura unilateral, conduce a la generación de buenos empleos. De allí la importancia de apoyar el crecimiento de los intercambios comerciales intracentroamericanos y, en términos generales, de impulsar el logro de etapas superiores de la integración.

2. Desindustrialización y exclusión social

Wilson (1987) planteó la hipótesis de que la desindustrialización y los cambios en la estructura económica de las ciudades de los Estados Unidos, que se iniciaron en los años sesenta, resultaron en la pérdida de buenos empleos, que han sido sustituidos por empleos de baja calidad en el sector de servicios. Agrega que, como consecuencia de la desindustrialización, han aumentado la pobreza y el desempleo, y ha cambiado la composición de la familia, situaciones que en conjunto el autor denomina *social disadvantage*, lo que se puede traducir como exclusión social. Además, añade que esta situación constituye el principal determinante del crimen en los Estados Unidos. Esta hipótesis ha motivado una serie de estudios con miras a validar sus conclusiones, con resultados que indican que la exclusión social, la privación de empleo y la pobreza son los determinantes más importantes del crimen urbano⁸. A continuación, se presenta una reseña de estudios representativos de la obra de Wilson.

Almgren y otros (1998) analizaron las causas de los homicidios en 75 barrios de Chicago (Illinois, Estados Unidos) usando datos de 1970 y 1990. En un primer análisis, los autores estimaron ecuaciones de mínimos cuadrados ordinarios que expresaban la tasa de 1990 de homicidios cometidos por hombres negros en términos de las tasas de desempleo de 1970 y 1990, con resultados que

⁸ Véanse las reseñas de Krivo y Peterson (1996) y Crutchfield, Matsueda y Drakulich (2002).

mostraron coeficientes significativos que explicaban el 72% de la tasa de homicidios. En la estimación de la misma ecuación para el caso de los hombres blancos, el coeficiente de la tasa de desempleo de 1970 resultó no significativo y la varianza explicada por la ecuación cayó al 56%. Dada la mayor incidencia de homicidios en los barrios negros, las computaciones de los autores indicaron que este grupo tenía una esperanza de vida inferior a la del grupo de hombres blancos (la edad promedio de muerte de los hombres negros era 11 años más baja que la de los blancos). Esta diferencia la explicaron por las mayores tasas de desempleo en los barrios negros (del 42,3% en 1990) con relación a los barrios blancos, donde la tasa promedio de desempleo era del 15%. Esto es evidencia de que el desempleo constituye una violación al derecho a la vida comprendido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Krivo y Peterson (1996) investigaron los determinantes del crimen en los barrios de Columbus (Ohio, Estados Unidos) usando variables independientes relacionadas con la exclusión social. Partieron del trabajo de Wilson, argumentando que los cambios en la estructura económica de los Estados Unidos, particularmente la desindustrialización, habían dado lugar a situaciones de desempleo y pobreza persistentes. Los autores usaron 177 divisiones del censo de 1990 para obtener datos de crímenes contra la propiedad (robo de autos, robo en residencias) y crímenes violentos (homicidio, violación, robo a mano armada) en cada división del censo. Estimaron ecuaciones de mínimos cuadrados ordinarios expresando la variable de crimen en términos de varios indicadores de exclusión social. Los resultados indicaron que, en el caso del crimen contra la propiedad, las variables que tenían coeficientes más significativos y de mayor dimensión eran los indicadores de desempleo alto y extremo. Otras variables que tenían coeficientes significativos eran los porcentajes de viviendas desocupadas (positivo) y de profesionales viviendo en la división (negativo). Las ecuaciones explicaron alrededor del 40% de la varianza de la tasa de crimen. En las ecuaciones para el crimen violento, los coeficientes de los porcentajes de hogares con jefe mujer y la tasa de pobreza extrema mostraron las mayores dimensiones; otras variables significativas fueron las tasas de desempleo masculino y de viviendas desocupadas. La varianza explicada por las ecuaciones fue, en promedio, del 70%.

Los autores estimaron otras ecuaciones dividiendo la muestra en dos grupos de divisiones del censo: uno de población blanca y otro de población negra. Los resultados mostraron que en los barrios de población blanca el crimen contra la propiedad era de mayor magnitud que en los barrios de población negra, pero la diferencia no era estadísticamente significativa. De la misma manera, en los barrios negros había mayor incidencia de crimen violento, pero la diferencia con los barrios blancos tampoco era significativa.

Concluyeron que el crimen es un reflejo de la situación social y económica del lugar de residencia —principalmente de la pobreza y el desempleo— y que el grupo étnico no tiene por sí solo ningún papel determinante. Expresaron que gran parte de las diferencias raciales cuando se trata de crímenes se debe a que blancos y negros suelen vivir en comunidades con estructuras distintas. Es más probable que los blancos vivan en zonas menos desfavorecidas y que los negros habiten en las comunidades más desfavorecidas. Entonces, los resultados de su estudio indican que las diferencias raciales en materia de violencia obedecen a diferencias estructurales de las comunidades en que viven (págs. 635-636).

Kubrin y Wadsworth (2003) analizaron datos de crímenes cometidos por personas negras entre 1985 y 1995 en la ciudad de Saint Louis (Missouri, Estados Unidos), desagregados por tipo de homicidio. Los autores construyeron un indicador compuesto de exclusión social, que consolidaba los porcentajes de población negra en situación de pobreza, desempleada, sin título de educación secundaria, hogares con mujer jefa de hogar, y el ingreso per cápita. Los resultados indicaron que la exclusión social era la variable determinante de las diversas clases de homicidios. Concluyeron que el crimen es el reflejo de la exclusión social y no es propio de ningún grupo étnico, argumentando que, si en los barrios habitados por personas blancas existieran los niveles de necesidades y carencias

típicos de los barrios negros (principalmente en relación con el empleo), los barrios blancos también estarían inmersos en situaciones de criminalidad, ya que las situaciones de exclusión social son el resultado de la interacción de factores estructurales que han creado y mantenido un sistema de estratificación que generó barrios de minorías caracterizados por múltiples situaciones de desventaja, como la pobreza, el desempleo y la desintegración familiar. Las fuerzas sociales, políticas y económicas que ayudan a crear factores estructurales incluyen, entre otras cosas, un legado de esclavitud y discriminación, prácticas discriminatorias y modelos de segregación residencial, y globalización y desindustrialización. Si estas u otras fuerzas hubieran creado las mismas situaciones de desventaja para la población blanca, se constatarían adaptaciones culturales similares entre dicha población. Sin embargo, esto no ocurrió. La concentración de desventajas que se encuentra en muchas comunidades afroamericanas urbanas rara vez tiene su paralelismo en barrios que tienen mayoritariamente población blanca (pág. 29).

Hay que agregar que Parker y Pruitt (2000) encontraron evidencia de que en los Estados Unidos la pobreza es un móvil del crimen en las poblaciones blancas y negras, pero impacta de manera más acentuada en la primera. Asimismo, la concentración de la pobreza, definida como el porcentaje de habitantes del color respectivo residentes en una división del censo donde la pobreza es superior al 40%, solo determinaba un comportamiento criminal en la población blanca.

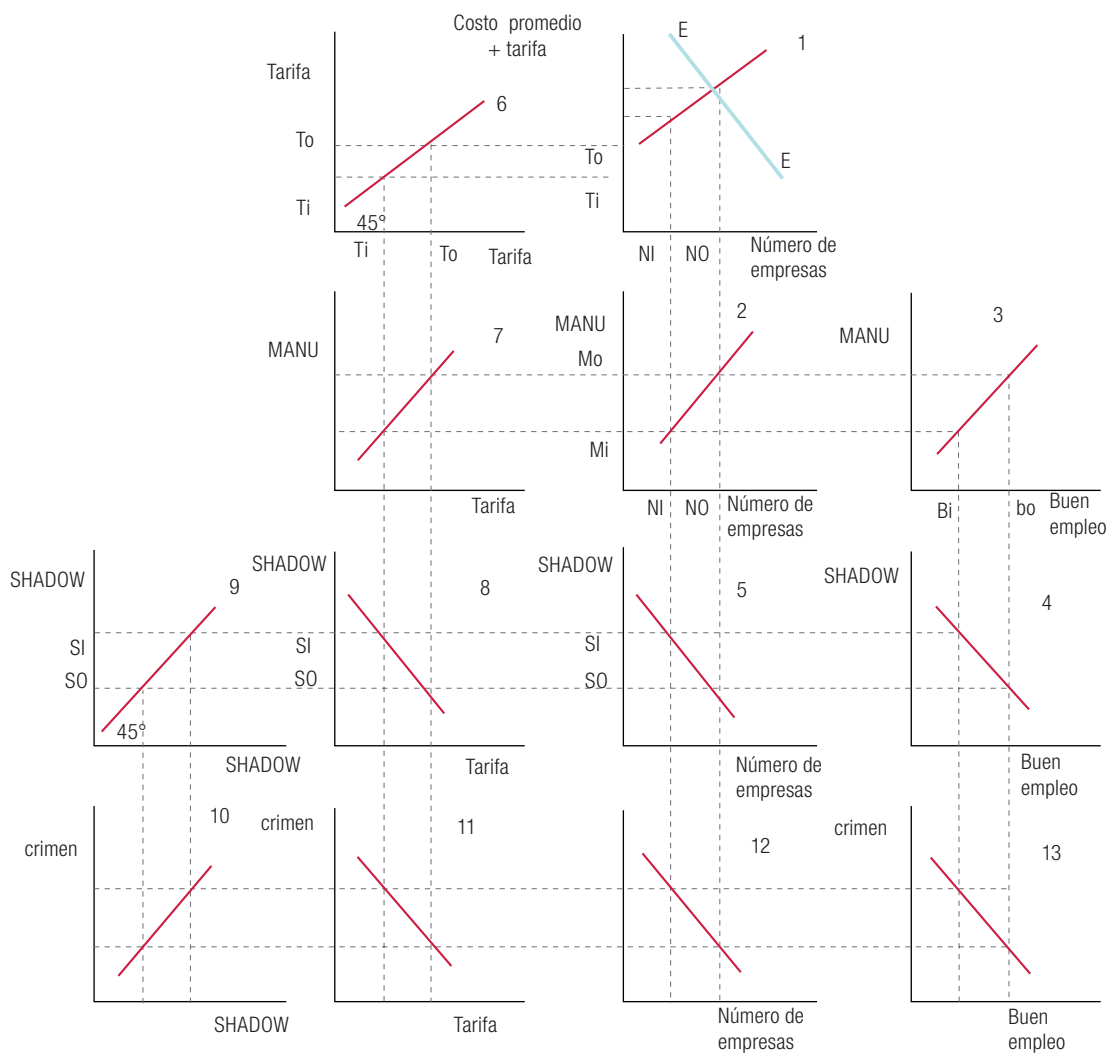
3. Repercusiones económicas y sociales de la liberalización comercial y de la desindustrialización

En el gráfico 7 se presentan las repercusiones económicas y sociales de la liberalización del comercio exterior y de la desindustrialización. En el cuadrante 1 se muestra el modelo de competencia monopolista en el mercado nacional, en el cual la ordenada representa el precio promedio de producción más la tarifa a la importación, mientras que la abscisa representa el número de empresas en el mercado nacional⁹. La línea CC indica que, al aumentar el número de empresas, el costo promedio también aumenta, dado que el mercado que cada una atiende disminuye, y así pierde beneficios de economías de escala. La línea EE expresa que el precio promedio cae a medida que el número de empresas aumenta, en virtud de la mayor competencia entre las empresas. El equilibrio ocurre en el precio promedio P_0 , que corresponde a una tarifa T_0 y a un número de empresas igual a N_0 . En el cuadrante 1 se supone que la tarifa se reduce a T_1 y, por lo tanto, el precio cae a P_1 y el número de empresas disminuye a N_1 .

En el cuadrante 2 se presenta la relación positiva entre el número de empresas y la participación del sector manufacturero en el producto, por lo que la reducción del número de empresas (formales), de N_0 a N_1 , da lugar a la caída de MANU, de M_0 a M_1 . En el cuadrante 3 se muestra la relación positiva entre MANU y la generación de buenos empleos, los cuales caen de b_0 a b_1 . En el cuadrante 4 se representa la asociación negativa entre los buenos empleos y la economía subterránea, SHADOW (Cáceres y Cáceres, 2017a). Con esa base, se construye en el cuadrante 5 la relación negativa entre el número de empresas y la dimensión de la economía subterránea, y se observa que la disminución de la tarifa de T_0 a T_1 da lugar al aumento de SHADOW de S_0 a S_1 . En el cuadrante 6 se muestra la línea de 45 grados por medio de la cual se construye en el cuadrante 7 la relación positiva entre MANU y la tarifa, es decir, a valores más altos de la tarifa corresponde mayor valor agregado manufacturero en el producto.

⁹ Este modelo se basa en Krugman y Obstfeld (1991).

Gráfico 7
Repercusiones de la liberalización comercial y de la desindustrialización



Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, en el cuadrante 8 se construye la relación negativa entre la tarifa y SHADOW, de manera que a una tarifa más baja corresponde una economía subterránea de mayor dimensión. En el cuadrante 9 se muestra la línea de 45 grados que permite representar SHADOW en la abscisa del cuadrante 10, cuya ordenada representa la tasa de homicidios. Con esa base se construye en el cuadrante 11 la relación negativa entre el crimen y la tarifa, que denota que, a medida que se reduce la tarifa, la tasa de crimen tiende a crecer. En el cuadrante 12 se muestra que la reducción del número de empresas está asociada con el incremento del crimen, mientras que en el cuadrante 13 se indica que la reducción de buenos empleos da lugar a aumentos del crimen.

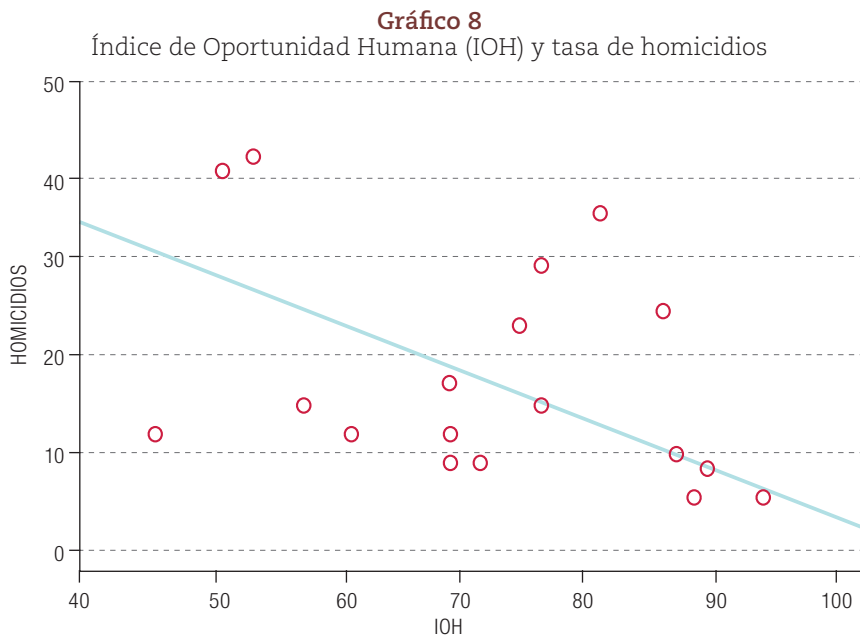
Se puede argumentar que la reducción arancelaria contribuiría al aumento de las exportaciones en un país. Sin embargo, en la apertura unilateral no hay garantía de que el país en cuestión tendrá acceso a otros mercados, dada su limitada oferta de exportaciones y la ausencia de economías de escala, mientras que sus empresas enfrentan importaciones de países que otorgan subsidios a sus exportadores, los cuales gozan de economías de escala. Existe evidencia para países latinoamericanos de que la liberalización comercial no ha conducido al aumento de las exportaciones ni del crecimiento

económico (Pacheco-López y Thirlwall, 2007 y 2008). Además, los trabajadores desplazados por las importaciones podrían no tener posibilidades de encontrar otros empleos de calidad y tenderán a emigrar, a entrar a la economía subterránea o a hacer carrera en el crimen.

V. Exclusión social y violencia en América Latina

Un indicador apropiado para representar el concepto de exclusión social, desarrollado en la obra de Wilson, es el índice de igualdad de oportunidades, propuesto por el Banco Mundial (Molinas y otros, 2011) para medir el grado en que las niñas y los niños de un país tienen acceso a los servicios de agua potable, electricidad, saneamiento, educación y vivienda, así como a terminar el sexto grado en el tiempo reglamentario, independientemente de los ingresos de sus padres y de su lugar de residencia. La igualdad de oportunidades se mide con el Índice de Oportunidad Humana (IOH), que varía de cero a la unidad y aumenta en la medida en que la igualdad de oportunidades se incrementa. Este indicador provee una apreciación de la distribución de los servicios sociales en el territorio y por niveles de ingreso, o sea que mide la concentración de servicios sociales públicos por área geográfica, ya sea urbana o rural, y por la distribución del ingreso.

Para comprobar la existencia de una asociación entre la igualdad de oportunidades y la tasa de homicidios se recurre a los valores de 2012 de la tasa de homicidios por cada 100.000 personas, tomados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y los valores de 2008 del IOH, publicados por el Banco Mundial. En una muestra de 16 países latinoamericanos se observa que existe una relación negativa entre el IOH y la tasa de homicidios (véase el gráfico 8). Se puede apreciar que países con bajos índices de oportunidad humana, como El Salvador, Guatemala y Honduras, tienen altas tasas de homicidios, mientras que países donde el IOH es alto, como la Argentina, Chile, Costa Rica y el Uruguay, las tasas de homicidios son bajas.

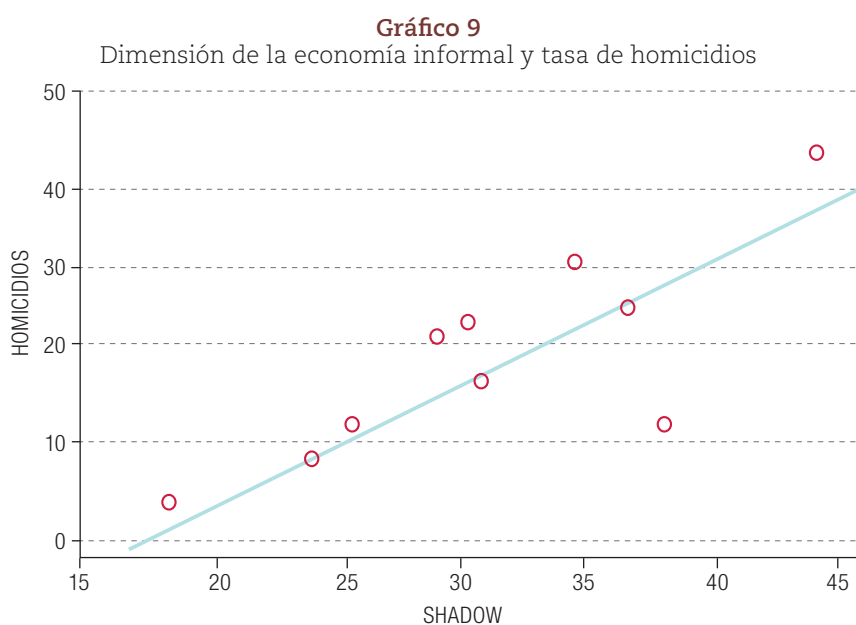


Fuente: Elaboración propia.

Cáceres y Cáceres (2017b) informaron, con base en una muestra de países latinoamericanos, que el IOH tiene una asociación positiva con la productividad laboral. El aumento de la productividad

laboral que resulta del aumento de la igualdad de oportunidades conduce a mayores ingresos laborales, y, por ende, a la reducción de la pobreza y de la violencia, lo que a la vez aumenta la productividad laboral, dando lugar a un círculo virtuoso. Es del caso apuntar que existe evidencia para los Estados Unidos de que la movilidad social, que es una manifestación de la igualdad de oportunidades, aumenta en la medida en que crece la calidad de las escuelas de educación primaria, el capital social y la estabilidad familiar, y disminuye con la reducción de la segregación residencial y de la desigualdad en la distribución del ingreso (Chetty y otros, 2014)¹⁰.

La dimensión de la economía informal también puede ser una medida de exclusión social. En el gráfico 9 se muestra, para un conjunto de diez países latinoamericanos, la relación positiva entre los valores de 2012 de la tasa de homicidios cada 100.000 personas y los valores de 2007 de la economía subterránea como porcentaje del producto, SHADOW, tomados de Buehn y Schneider (2012). Se puede observar que, a medida que aumenta la dimensión de la economía subterránea, aumenta la tasa de homicidios.



Fuente: Elaboración propia.

La relación positiva que se observa en los países latinoamericanos entre el autoempleo, o sea la economía subterránea (SHADOW), y la tasa de homicidios es congruente con la teoría de Wilson de que la exclusión social provoca comportamientos antisociales. En este punto hay que recalcar la influencia de la desindustrialización en el incremento del autoempleo, o sea, de la informalidad, como se mostró en las ecuaciones del cuadro 2. En virtud de esos resultados se establece el vínculo entre desindustrialización y violencia.

¹⁰ Para resumir sus resultados, estos autores sostienen que las zonas de alta movilidad tienen: i) menos segregación residencial, ii) menos desigualdad del ingreso, iii) mejores escuelas primarias, iv) mayor capital social y v) mayor estabilidad familiar (pág. 1554).

1. Estimación de ecuaciones de cointegración para identificar determinantes de la tasa de homicidios en los países latinoamericanos

En el cuadro 8 se presentan los resultados de la estimación de varias ecuaciones cuya variable dependiente es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2012, en función de distintas variables independientes. Se introduce en las estimaciones una variable cualitativa, CUALI1, que toma el valor de 1 cuando un país tiene una tasa de homicidios por debajo de, o igual a, 20, y toma el valor de 0 cuando la tasa de homicidios de un país es superior a 20. También se incluye otra variable cualitativa, CUALI2, con un valor de 1 cuando la tasa de homicidios corresponde a la de Honduras, y de 0 cuando es de otra manera.

Cuadro 8
Determinantes de la tasa de homicidios
(Variable dependiente: tasa de homicidios)

Variables independientes	Ecuación número:			
	(1)	(2)	(3)	(4)
CONSTANT	25,1749	3,4338	28,4221	47,9468
		(3,43)	(4,71)	(21,92)
CUALI1	-17,0631			-18,1928
	(11,83)			(9,31)
CUALI2		70,0700		
		(5,85)		
REMITT	0,8416			
	(6,65)			
TAX2012		0,7027		
		(1,65)		
TAX1870			-2,2487	
			(1,90)	
IOH				-0,2580
				(4,69)
R cuadrado	0,75	0,76	0,28	0,86
Variables independientes	Ecuación número:			
	(5)	(6)	(7)	(8)
Constante	10,5328	23,0669	34,8962	35,4566
	(9,23)	(7,14)	(9,91)	(8,98)
CUALI1	-18,8875	-18,2332	-18,3068	-18,2914
	(3,41)	(10,81)	(10,02)	(10,95)
Autoempleo femenino	0,1403			
	(2,53)			
Autoempleo masculino		0,1385		
		(1,96)		
Empleo de calidad femenino			-0,1085	
			(1,88)	
Empleo de calidad masculino				-0,11411
				(1,72)
R cuadrado	0,78	0,74	0,75	0,72

Fuente: Elaboración propia.

La ecuación (1) muestra que el coeficiente de las remesas como porcentaje del PIB, REMITT, es positivo y significativo, y el R2 es 0,75. Esto hace ver que las remesas representan la escasez de empleos de calidad y la existencia de una red de protección social inadecuada, dos elementos que promueven la emigración, y, por tanto, las remesas.

En la ecuación (2) se puede observar que el coeficiente del ratio de ingresos fiscales a PIB de 2012 (TAX2012) es negativo y significativo al nivel del 11%, lo que implica que a mayor carga tributaria en un país latinoamericano, más baja sería la tasa de homicidios. Es decir, la mayor recaudación tributaria permitiría aumentar el gasto social y, por tanto, los niveles de educación de la población y los puestos de trabajo de calidad, que generarían opciones de empleo más atractivas para los individuos que la violencia.

En la ecuación (3) se expresa la tasa de homicidios de 2012 en términos del respectivo monto de impuestos per cápita pagados en 1870 en 11 países latinoamericanos, tomado de Sokoloff y Zolt (2004). Esta variable tiene un coeficiente negativo y significativo, y la ecuación explica el 28% de la tasa de homicidios. Esto indica que la violencia del presente puede ser vista como una “herencia” del pasado, es decir, recoge los efectos de una inversión social históricamente baja, condicionada por la escasa recaudación tributaria. En otras palabras, las consecuencias de la baja tributación se reproducen, reflejando la estructura de desigualdad de carácter histórico en la región, que ha reproducido la baja tributación, el bajo gasto social y la violencia.

En la ecuación (4) se muestra que el coeficiente del IOH es negativo y significativo, y que el R2 es 0,86, el más alto de todas las ecuaciones estimadas. Este resultado evidencia que la igualdad de oportunidades tiene un importante papel en la reducción de la violencia en los países latinoamericanos.

En las ecuaciones (5) y (6), las tasas de autoempleo femenino y masculino tienen coeficientes positivos y significativos. Los R2 de estas ecuaciones son altos (0,78 y 0,74), lo que afirma que el autoempleo, es decir, la informalidad, conduce a la violencia.

En la ecuación (7) se observa que el coeficiente de la tasa de empleo de calidad femenino es negativo y significativo. Sin embargo, en la ecuación (8) se indica que el coeficiente de la tasa de empleo de calidad masculino es negativo, pero marginalmente significativo. Esto sugiere que las mujeres que tienen empleos de calidad ejercen un efecto de “pacificación”, lo que no se observa en los hombres. Este impacto particular se podría explicar por la evidencia de que cuando la mujer tiene buenos ingresos, todos los miembros del hogar se benefician, lo que no ocurre en el caso de los hombres (Banco Mundial, 2011). La ironía es que en la mayoría de los países latinoamericanos las mujeres ocupan empleos de calidad en porcentajes más bajos que los hombres. Si existiera equidad de género en términos de acceso a buenos trabajos y salarios, esto daría lugar a reducciones en el crimen gracias a las “internalidades” ejercidas por la propensión a compartir de las mujeres. En un estudio realizado recientemente para México se reportó que cuando el número de mujeres trabajadoras del sector manufacturero aumenta, estas adquieren más capacidad de decisión en el hogar, lo que acarrea beneficios para sus hijos (Majlesi, 2016)¹¹. Cabe aquí hacer referencia al estudio de Klasen (1999), donde se encontró evidencia de que la disparidad de género en educación y empleo reduce la tasa de crecimiento económico¹².

La obtención de buenos empleos por parte de las mujeres se facilitaría con el diseño y la puesta en marcha de centros de guardería infantil, donde las niñas y los niños puedan recibir atención de desarrollo temprano. Esto también serviría para que las mujeres, en especial las madres solteras, puedan continuar con sus estudios, lo que contribuiría a que eventualmente obtuvieran buenos empleos y a incrementar su participación laboral, lo que, a su vez, y como han mostrado Van Ewijk y otros (2006), contribuye a cerrar el déficit fiscal.

¹¹ Este autor concluyó que, a medida que aumenta la demanda relativa de mano de obra femenina, las mujeres ganan poder de decisión en lo que respecta a sus propios servicios y bienes privados, como su condición laboral y el dinero que reciben sus padres, así como algunas decisiones respecto de los bienes públicos.

¹² El autor señala que la desigualdad de género impide el crecimiento económico: de manera directa distorsionando incentivos y de manera indirecta mediante su efecto en el crecimiento de la población y la inversión. Los efectos son considerables. Si Asia Meridional y el África Subsahariana hubieran alcanzado logros educativos con más equidad de género en 1960, y si hubieran hecho más para promover un crecimiento de la educación basado en la igualdad de género, su crecimiento económico podría haber sido hasta un 0,9% anual más rápido del registrado (pág. 23).

De lo expuesto se desprende que aumentar el gasto social con miras a incrementar la igualdad de oportunidades es una inversión clave para reducir la violencia. Esta puede ser una inversión que se paga por sí misma, en vista de la evidencia de que la movilidad social conduce a incrementar el dinamismo económico y, por tanto, a aumentar los ingresos tributarios (Molina, Narayan y Saavedra-Chanduvi, 2013).

2. Determinantes del autoempleo y del empleo de calidad

En vista de la importancia de las tasas de empleo de calidad y de autoempleo en la determinación de la violencia, es de interés conocer las variables que determinan estos tipos de empleo. En el cuadro 9 se presentan los resultados cuando la variable independiente es el monto del gasto social per cápita, tomado de CEPAL (2011). En las ecuaciones (1) y (2), las variables dependientes son las tasas de autoempleo femenino y masculino, respectivamente. Se observa que el gasto social per cápita tiene coeficientes negativos y significativos, y los R² son 0,54 y 0,61, respectivamente. En las ecuaciones (3) y (4) las variables dependientes son las tasas de empleo de calidad femenino y masculino, y en estas ecuaciones el gasto social per cápita tiene coeficientes positivos y significativos, y los R² son 0,67 y 0,60, respectivamente. Dado que el empleo de calidad aumenta y el autoempleo disminuye en la medida en que aumenta el gasto social per cápita, se deduce que el gasto social representa un “arma” para combatir el crimen.

Cuadro 9
Determinantes de la calidad del empleo

Variables independientes	Variable dependiente			
	Autoempleo		Empleo de calidad	
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino
	Ecuación número:			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Constante	56,9588 (12,51)	55,0328 (25,41)	39,3271 (13,72)	43,7550 (16,80)
Gasto social per cápita	-0,0332 (6,14)	-0,0254 (7,28)	0,0361 (7,81)	0,0264 (6,28)
R cuadrado	0,54	0,61	0,67	0,60

Fuente: Elaboración propia.

3. Desigualdad, tributación y violencia

El aumento del gasto social enfrenta la barrera de la baja recaudación tributaria que se da en El Salvador. Como porcentaje del PIB, esta se sitúa cuatro puntos porcentuales por debajo de lo que corresponde para estar en congruencia con los valores de los países latinoamericanos que presentan niveles similares de desarrollo (Gómez-Sabaini, 2006; Sen Gupta, 2007).

En varios estudios recientes se han analizado las razones que explican que las tasas de tributación sean tan bajas en algunos países de América Latina. De especial importancia son los estudios de Cárdenas y Tuzemen (2010) y Cárdenas (2010), quienes encuentran evidencia de que en los países latinoamericanos, la capacidad del Estado es mayor en países donde la desigualdad es baja. Los autores definen la capacidad del Estado en términos de la recaudación fiscal como porcentaje del PIB, y del índice de capacidad de la burocracia para diseñar y ejecutar políticas públicas¹³. Además, estimaron ecuaciones para explicar estos indicadores con resultados que apuntaron que

¹³ Los índices de capacidad institucional para formular políticas públicas son elaborados y publicados por el National Resource Governance Institute y la Brookings Institution (véase [en línea] www.govindicators.org).

la desigualdad de la distribución del ingreso y del poder político tenía efectos negativos sobre los indicadores de capacidad estatal, es decir, sobre la movilización de ingresos tributarios.

Por su parte, Ardanaz y Scartascini (2011) encontraron que la baja recaudación de impuestos sobre la renta personal en los países de América Latina se explica por la sobrerrepresentación, en los Congresos de estos países, de distritos que tienen afinidad con los grupos de altos ingresos, de manera que los intentos de aumentar los impuestos sobre la renta encuentran gran oposición¹⁴. Los autores también hallaron evidencia de que la sobrerrepresentación política estaba determinada, en parte, por la desigualdad en la distribución del ingreso.

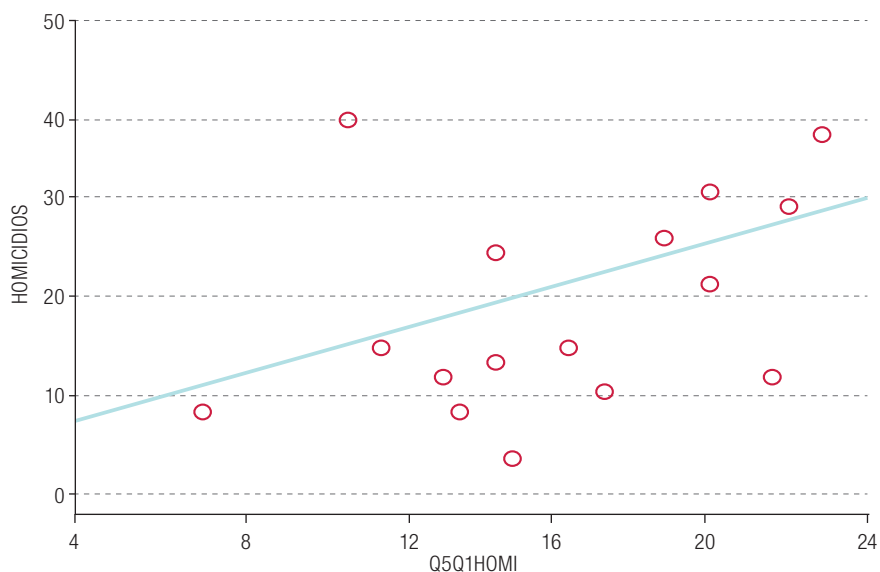
La desigualdad en la distribución del ingreso da lugar a la desigualdad en el poder político, lo que tiene repercusiones en la capacidad de las instituciones. En un estudio del BID (Scartascini y Tommasi, 2009) se plantea un modelo en el cual la desigualdad en la distribución del poder político promueve la “política” del favoritismo, lo que genera inestabilidad y debilita las instituciones. En dicho estudio se añade que la percepción de la población de que el sistema político sirve para mantener privilegios y otorgar favores conduce a segmentos de la población a adoptar otras medidas de expresión política, especialmente en términos de manifestaciones contra el gobierno, huelgas, disturbios, asesinatos de políticos, guerra guerrillas y crisis gubernamentales (pág. 26)¹⁵. Por tanto, se puede esperar que cuanto mayor sea la desigualdad en la distribución del ingreso, mayor será la violencia en un país. La relación positiva entre la desigualdad en la distribución del ingreso, representada por el cociente de la porción del ingreso destinada al quinto quintil y la destinada al primer quintil, Q5Q1, y la tasa de homicidios pone en evidencia que la desigualdad tiene una estrecha asociación con la violencia en la región (véase el gráfico 10). La explicación de esta relación podría descansar en que cuanto mayor es la desigualdad, mayor es la oposición al incremento de ingresos tributarios y, por tanto, no es posible aumentar el gasto social, y así se frustra el incremento del capital humano y la generación de buenos empleos¹⁶. Estas son relaciones que se han ido “incubando” a través del tiempo. De hecho en el gráfico 11 se observa una relación negativa entre la tasa de tributación (ingresos fiscales entre producto) en 1972, TAX1972, de una muestra de 14 países latinoamericanos, tomada de Banco Mundial (1984), y la tasa de homicidios de 2012.

¹⁴ El comunicado de prensa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con relación con este estudio apunta que: “Una representación política injusta, que aumenta el peso de los distritos donde las elites tienen mayor peso, les concede un mayor poder en la formulación de políticas. Como resultado de ello, estos sectores tienen una mayor capacidad para proteger sus intereses e influir a su favor en la formulación de la política fiscal... El estudio también encontró que las disparidades económicas son un motor importante de desigualdades en la representación política: en efecto, una mayor sobrerrepresentación política de algunos grupos ligados a las estructuras más conservadoras de la sociedad es significativamente mayor en aquellos países que están caracterizados por una mayor distribución desigual de la riqueza y los ingresos” (BID, 2011).

¹⁵ Es de relevancia citar a Bértola (2011) que, con relación a la desigualdad en los países latinoamericanos, dice que cuando hay una alta concentración de poder y riqueza se genera un contexto en el cual a las élites les resulta más fácil expropiar riqueza e ingresos y hacer abuso del poder, pero este tipo de situación obstaculiza la acumulación de capital humano. Una distribución asimétrica de los ingresos y la riqueza probablemente imponga límites a la acumulación de educación y conocimiento de la mayor parte de la población, y, de esa forma, impida el crecimiento (pág. 6).

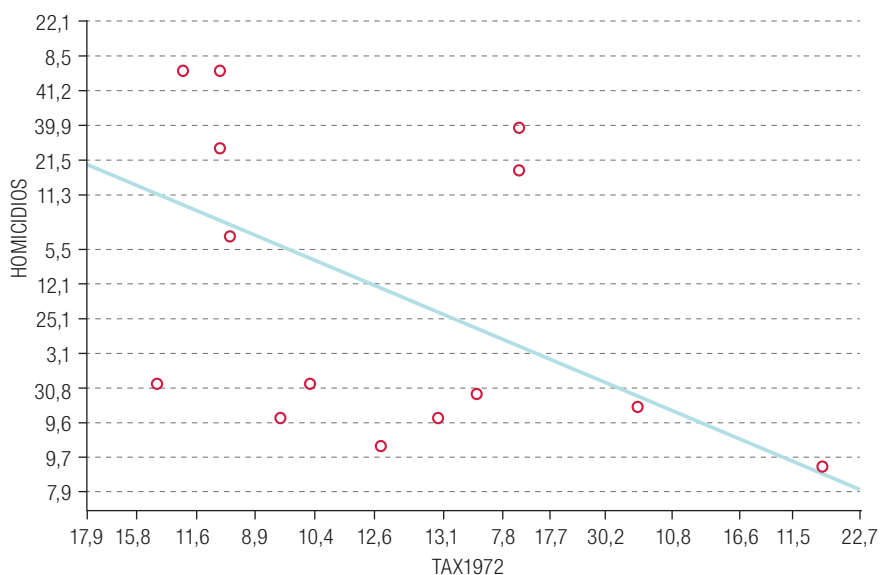
¹⁶ La ecuación estimada es: $GASTOSOCIALPC = 1044,4750 - 35,3796Q5Q1$ $R^2 = 0,21$.
(3,60) (2,07)

Gráfico 10
Desigualdad en la distribución del ingreso y tasa de homicidios



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 11
Tasa de impuestos en 1972 y tasa de homicidios en 2012

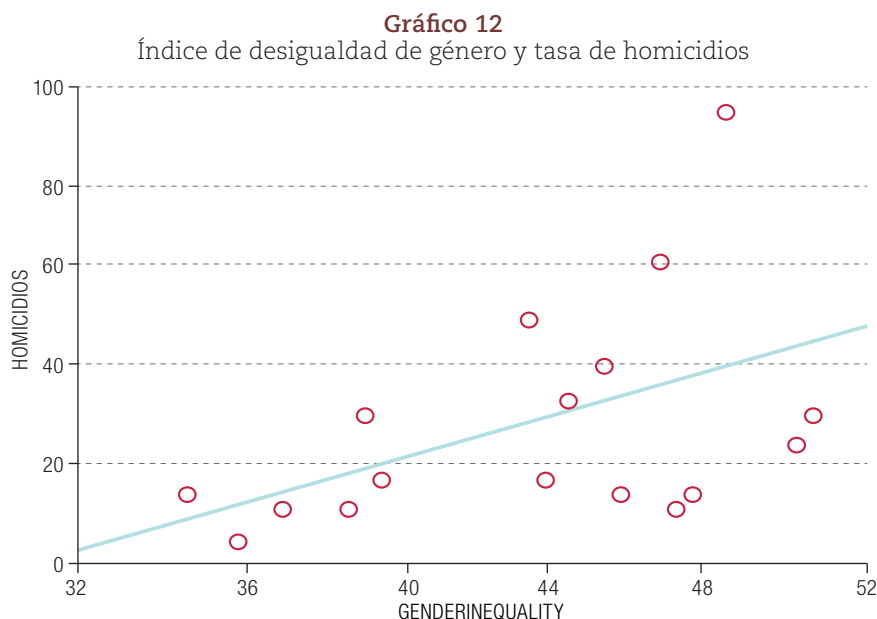


Fuente: Elaboración propia.

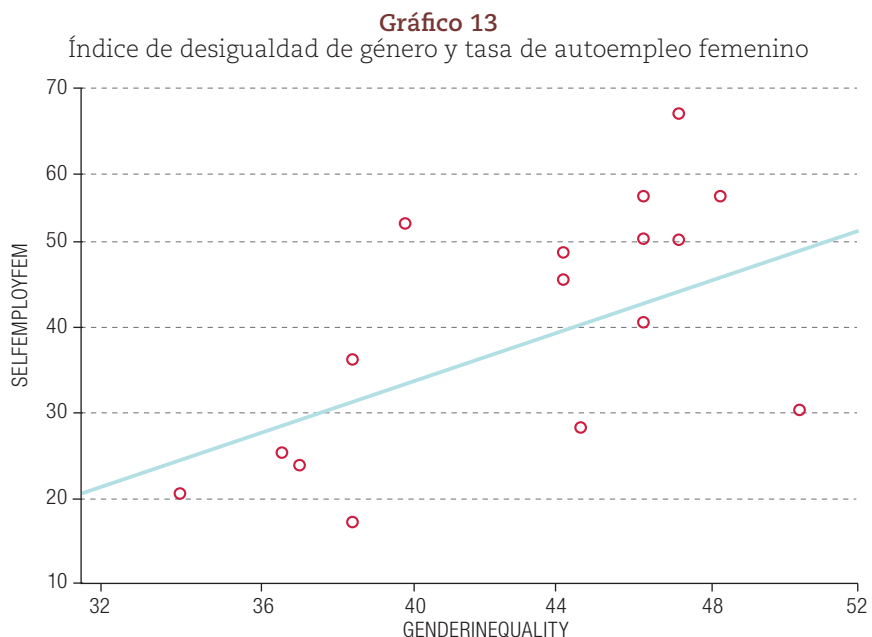
4. Género y violencia

Un tema de especial interés es la relación entre la desigualdad de género y la violencia. En los gráficos 12 y 13, en base a datos de panel, se muestra la existencia de relaciones negativas entre el índice de desigualdad de género, tomado de PNUD (2014), y las tasas de homicidios y de autoempleo femenino en los países latinoamericanos. El índice de desigualdad de género mide el promedio de las diferencias entre mujeres y hombres en tres categorías: salud reproductiva, mercado laboral y empoderamiento.

En el gráfico 12 se puede apreciar que la desigualdad de género tiene una asociación positiva con la violencia. La explicación puede radicar en la relación positiva que existe entre la desigualdad de género y la tasa de autoempleo femenino, que se muestra en el gráfico 13.



Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Como se mostró en los resultados econométricos, el autoempleo tiene un impacto positivo sobre el crimen, por lo cual, si la desigualdad de género conduce a que las mujeres entren al autoempleo, también contribuirá al crimen.

En el cuadro 10 se presentan los resultados de estimaciones de ecuaciones que expresan la tasa de homicidios en términos del indicador de desigualdad de género y de las remesas. Estas ecuaciones incluyen las variables cualitativas CUALI1, que tiene el valor de 1 cuando el índice de homicidios es superior a 20 y de 0 si es de otra manera, y CUALI2, cuyo valor es 1 cuando el valor corresponde a Honduras y 0 si es de otra manera.

Cuadro 10
Desigualdad de género y tasa de homicidios

Variable dependiente	Tasa de homicidios	
Constante	-20,3307 (1,38)	36,9490 (2,53)
CUALI1	20,8197 (5,85)	22,5727 (7,07)
CUALI2	57,4158 (8,06)	53,7129 (8,51)
Desigualdad de género	71,2805 (2,07)	103,4636 (3,15)
Remesas		0,5402 (2,00)
R cuadrado	0,88	0,94

Fuente: Elaboración propia.

En la ecuación (1) se muestra que la desigualdad de género (y las variables cualitativas) explican el 88% de la varianza de las tasas de homicidios en América Latina. En la ecuación (2) se observa que el coeficiente de las remesas es positivo y significativo; esto hace ver que la conjunción de la desigualdad de género y las remesas (emigración, falta de oportunidades de empleo de calidad) explica casi la totalidad de la varianza de la violencia en la región. Ello implica que la reducción de la violencia en los países de América Latina requiere de avances en materia de igualdad de género.

Por otra parte, el índice de fertilidad de adolescentes, publicado por PNUD (2014), mide el número de nacimientos o partos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años. Las relaciones econométricas entre las tasas de homicidios y de fertilidad de adolescentes se presentan en el cuadro 11. En la ecuación (1), la fertilidad de adolescentes explica el 48% de la tasa de homicidios en los países latinoamericanos, y su coeficiente es positivo, pero solo significativo al nivel del 11%. Esto muestra que la fertilidad de las adolescentes de por sí no es un medio incubador o generador de crimen, lo que implica que no es válido asociar el crimen con la ausencia de facilidades de abortos y anticonceptivos en un país.

En la ecuación (2), la variable dependiente es el índice de desigualdad de género, y se observa que el IOH tiene un coeficiente negativo y significativo, aun cuando en la ecuación se incluye la variable que mide la prevalencia del Estado de derecho, cuyo coeficiente es significativo y negativo. Esto indica que el índice de desigualdad de género refleja las limitaciones que las niñas enfrentan en cuanto al acceso a los servicios sociales, así como la debilidad de las instituciones nacionales. Sin embargo, el R2 de esta ecuación solo es 0,51, lo que indica que la desigualdad de género es más que el reflejo del desigual acceso a los servicios sociales y la debilidad institucional, y se podría asociar con “prácticas culturales” de abuso, impunidad, arbitrariedad y opresión.

De particular importancia es la ecuación (3), cuya variable dependiente es la tasa de fertilidad de adolescentes, que muestra que el IOH y el Estado de derecho tienen coeficientes no significativos. Hay que recalcar que la desigualdad de género tiene un coeficiente significativo, contrario a la ausencia de importancia del acceso de servicios sociales y de la debilidad institucional. Este resultado implicaría que la fertilidad de las adolescentes refleja las arbitrariedades, la violencia y los abusos relacionados

con la desigualdad de género, que pueden existir aun cuando el país en cuestión tenga instituciones sólidas y una alta cobertura de servicios sociales. En el gráfico 14 se puede observar la estrecha asociación entre la desigualdad de género y la fertilidad de adolescentes, mientras que el gráfico 15 muestra la asociación positiva entre las tasas de autoempleo femenino y de fertilidad de adolescentes.

Cuadro 11

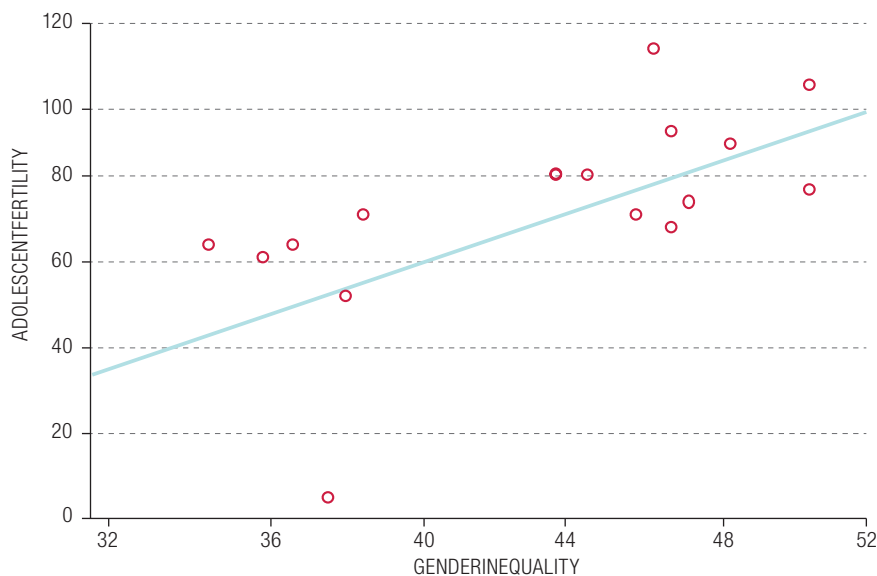
Tasa de homicidios, desigualdad de género e índice de fertilidad de adolescentes

Variable dependiente	Homicidios	Desigualdad de género	Fertilidad de adolescentes
Ecuación número	1	2	3
Constante	-3,7363 (0,45)	0,5212 (13,28)	-27,4887 (0,64)
CUAL1	20,0761 (5,66)		
CUAL2	59,2307 (8,50)		
Fertilidad de adolescentes	0,2000 (1,76)		
Estado de derecho		-0,0334 (3,16)	5,2957 (0,94)
IOH		-0,0013 (7,71)	-0,2317 (0,96)
Desigualdad de género			276,5893 (3,56)
R cuadrado	0,48	0,51	0,48

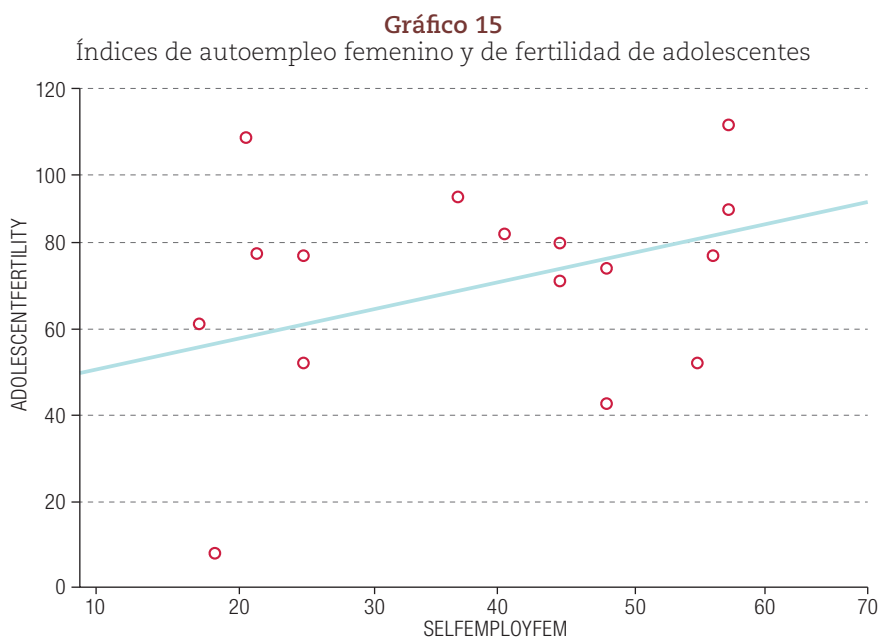
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 14

Índice de desigualdad de género y tasa de fertilidad de adolescentes

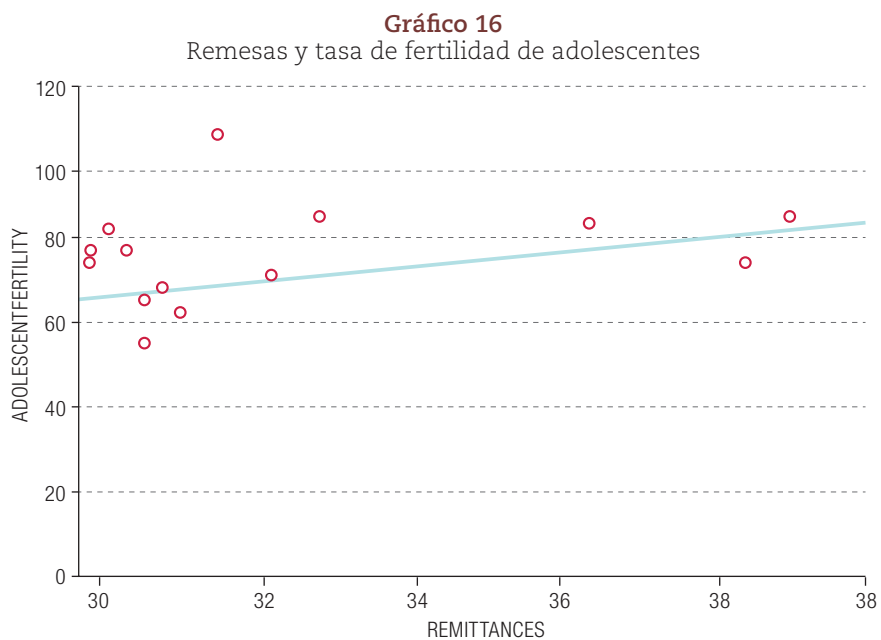


Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, las remesas no muestran ninguna asociación con la fertilidad de las adolescentes, como se registra en el gráfico 16, por lo que no se puede argumentar que la emigración es una variable determinante de la fertilidad a edad temprana¹⁷.



Fuente: Elaboración propia.

¹⁷ La ecuación estimada es: Fertilidad de las adolescentes = 7,5386 + 0,5663 Remesas
(16,07) (0,97) R2=0,05

VI. Conclusiones

Los resultados presentados en este trabajo indican que la apertura extrema de la economía salvadoreña y la consecuente desindustrialización tienen efectos perversos en el mercado laboral, tanto en términos de aumento del autoempleo y el empleo a tiempo parcial, como de caída del empleo de calidad. Estas repercusiones dan lugar a decrementos de la productividad, lo que incide en el descenso de la demanda agregada y del crecimiento económico. A su vez, esto redundará en otra ronda de desindustrialización. Es decir que la apertura extrema puede poner en movimiento un proceso autosostenido, o sea, una trampa de desindustrialización, que se traduce en autoempleo persistente.

De lo expuesto se desprende la necesidad de impulsar la reindustrialización y dar marcha atrás a la apertura extrema de la economía, otorgando alta prioridad a la integración regional y al impulso del capital humano como base del desarrollo nacional. Después de varias décadas de apertura extrema sin beneficios palpables, es imperativo cambiar el rumbo de la política económica hacia propuestas que tengan asidero en la historia de los países ahora desarrollados, que lograron su desarrollo con base en la protección, la regulación y el apoyo sustancial al desarrollo humano. Es solo una ilusión concebir que el país pueda desarrollarse sin atender las brechas sociales. Según Easterlin (1981), la historia del desarrollo económico muestra que el desarrollo social precede al despegue económico. Este autor ha presentado evidencia histórica de que el despegue hacia el desarrollo económico ocurre cuando la sociedad ubica a la educación en el mismo orden de importancia que la religión.

Los resultados muestran que la desigualdad en la distribución del ingreso inhibe el aumento de la recaudación tributaria y, por tanto, pone un techo al gasto social, sin que se pueda atender las brechas sociales de manera categórica. De esta manera, se promueve la violencia, lo que se refleja en la relación positiva entre la desigualdad y la violencia que se observa en el gráfico 12. Como lo han mostrado varios autores (Banco Mundial, 2011), la violencia tiene una incidencia negativa en el crecimiento económico, lo que reduce los ingresos tributarios y de ese modo ocurre otra ronda de caída del gasto social y del consecuente aumento de la violencia, y así sucesivamente, en un ciclo vicioso de baja tributación.

La exclusión social no es el único determinante de la violencia, pero es de especial importancia: las ecuaciones de regresión mostraron que el subempleo explicaba el 60% de la varianza de la tasa de homicidios en América Latina, mientras que el IOH explicaba el 70%. Estos resultados ponen en evidencia que las manifestaciones de la exclusión pueden explicar gran parte de la violencia¹⁸. No se puede obviar el papel de la violencia resultado de las pandillas juveniles, pero el punto de especial relevancia es que las tasas de homicidios más altas en la región, así como la mayor proliferación de las pandillas, corresponden a países donde las tasas de tributación, el gasto social y el IOH son las más bajas, y donde la economía subterránea y el autoempleo muestran las tasas más altas. En este sentido, la violencia de las pandillas puede ubicarse en el marco de la exclusión social, según la obra de Wilson (1987).

Por otra parte, Crutchfield (1989) y Crutchfield y Pitchford (1997) han presentado evidencia de que los padres de familia que están en situación de desempleo o subempleo tienen poca disposición a hablar con énfasis a sus hijos sobre la importancia de los estudios, y que estos, al ver la situación deplorable de sus padres, adquieren la tendencia a retar el orden establecido y a no comportarse de acuerdo con las reglas de juego, ya que sienten que su familia es participante o accionista de segunda categoría en la sociedad y que la misma suerte les espera en el futuro. Esta situación puede conducir a la generación de una masa crítica de individuos que sienten que tienen poco que perder si entran a

¹⁸ Existe evidencia de que en los Estados Unidos, la tasa de suicidios de ciudadanos afroamericanos aumenta por área geográfica en la medida en que las desigualdades de ingreso y ocupación respecto de la población blanca de la misma área son más pronunciadas (Burr, Hartman y Matteson, 1999).

la vida de la violencia. Todo esto indica que, en ausencia de una política ambiciosa de desarrollo que incluya un aumento sustancial del gasto social, difícilmente se puede poner coto a la violencia.

En el contexto histórico, la baja recaudación tributaria no ha permitido a la población de El Salvador alcanzar los niveles de capital humano necesarios para fomentar la generación de buenos empleos, incrementar la productividad y, en términos generales, impulsar el desarrollo¹⁹.

En algunos países de la región, la renuencia a incrementar la tributación y el gasto social podría obedecer a la opinión de que las personas pobres o pertenecientes a determinados grupos étnicos carecen de responsabilidad para conducir su vida en una manera que les permita adquirir bienes públicos sociales. Además, existe la percepción falsa de que las personas pobres son propensas a tomar decisiones que no contribuyen a la superación de su situación de pobreza. Este argumento no toma en cuenta la evidencia de que la condición de pobreza de un individuo depende, en gran parte, de la riqueza de sus padres, y que la pobreza se transmite de una generación a otra, ya que las personas con recursos limitados no pueden brindar a sus descendientes los niveles de educación y salud que se necesitan para que se desempeñen con éxito en el mercado laboral (Cunha y Heckman, 2009; Currie, 2009).

Con relación a la evidencia de que la desigualdad en la distribución del ingreso y en el poder político da lugar a frustrar los intentos por incrementar la recaudación fiscal, a minar la capacidad del Estado para recaudar ingresos tributarios y a debilitar la capacidad de diseño de políticas —lo que redundaría en frustrar la expansión de los servicios sociales y, en consecuencia, en estimular la violencia—, es imperativo poner en práctica medidas redistributivas para reducir la desigualdad. En un trabajo para los países latinoamericanos, González y Martner (2012) demostraron que la desigualdad disminuye con el aumento del gasto social y de la inversión pública, con la expansión de las pensiones y del gasto público en educación, con el incremento de la tasa de matrícula en la educación secundaria y con el alza de los impuestos directos. Esto indica que mediante aumentos de la tributación y del gasto social se puede alcanzar una economía, una sociedad y procesos políticos más equitativos, lo que contribuiría a evitar el destino cruel que grandes segmentos de la población han tenido de generación en generación.

En un estudio del Banco Mundial (2011) se muestra que una reducción del 10% en los homicidios en El Salvador resultaría en un aumento de un 1% adicional en la tasa de crecimiento económico. Esto hace ver que el esfuerzo fiscal que hay que llevar a cabo para atender los problemas de seguridad y de desarrollo humano podría pagarse por sí solo, en vista del mayor tamaño de la economía, que daría lugar a la generación de nuevos empleos de buena calidad, así como al incremento de las ventas y ganancias de las empresas.

Por tanto, existe la necesidad de alcanzar un pacto fiscal que refleje acuerdos entre el esfuerzo tributario adicional y el destino de la nueva recaudación, así como la reducción de los gastos públicos superfluos. En cuanto a las áreas a ser atendidas con el esfuerzo tributario adicional se encuentran incrementos sustanciales en la seguridad, la expansión de la infraestructura física en las áreas rurales y el impulso a la educación en las áreas rurales del país, así como programas de creación de empleo de emergencia. Además, es imperativo mejorar sustancialmente la calidad de la educación; existe evidencia de que los estudiantes de educación secundaria que estudiaron en una escuela reconocida como de calidad tuvieron un 50% menos de experiencias delictivas que aquellos que asistieron a una escuela no reconocida como de alta calidad (Deming, 2011). Es sumamente importante impulsar en todo el territorio nacional la educación preescolar, sobre la cual diversos estudios han demostrado que es un medio valioso para incrementar la capacidad cognitiva de niñas y niños, lo que da lugar a que obtengan buenos empleos y mayores salarios al llegar a la mayoría de edad y entrar al mercado

¹⁹ Basta señalar que, de acuerdo con los datos presentados por Barro-Lee (s/f), el nivel promedio de educación era solo de un año en 1950, o sea, 130 años después de la independencia.

laboral (Chetty y otros, 2011). Relacionado con este último punto se encuentra el establecimiento de una red nacional de centros de guardería infantil.

Lo mencionado no representa una “lista de compras”; es lo mínimo que hace décadas se debería haber hecho y que hubiera servido para evitar la problemática de la violencia actual. No solo es un sueño, es creer que El Salvador puede tener un mejor futuro, que las mujeres y los hombres del país merecen gozar de prosperidad y dignidad, y que se puede detener el derramamiento de sangre.

Porque todas las vidas importan.

Bibliografía

- Acs, Z. J., D. B. Audretsch y D. S. Evans (1992), *The Determinants of Variations in Self-Employment Rates across Countries and over Time*, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
- Almgren, G. y otros (1998), “Joblessness, family disruption, and violent death in Chicago, 1970-90”, *Social Forces*, vol. 76, N° 4, Oxford, Oxford University Press.
- Ardanaz, M. y C. Scartascini (2011), “Why don't we tax the rich? Inequality, legislative malapportionment, and personal income taxation around the world”, *IDB Working Paper Series*, N° IDB-WP-282, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Arulampalam, W. (2001), “Is unemployment really scarring? Effects on unemployment experiences on wages”, *The Economic Journal*, vol. 111, N° 475, Wiley.
- Banco Mundial (2011), *Crimen y violencia en Centroamérica: un desafío para el desarrollo*, Washington, D.C.
- _____(1984), *Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1984*, Washington, D.C.
- Barro-Lee (s/f), “Educational Attainment Dataset” [en línea] <http://barrolee.com/>.
- Belcher, J. R. y F. A. DiBlasio (1993), “Economic decline and worker participation”, *The Journal of Applied Social Sciences*, vol. 17, SAGE Publications.
- Bértola, L. (2011), “Institutions and the historical roots of Latin American divergence”, *The Oxford Handbook of Latin American Economics*, J. A. Ocampo y J. Ros (eds.), Oxford, Oxford University Press.
- BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (2011), “Estudio del BID vincula menor nivel de impuestos sobre la renta personal a la existencia de una representación política desigual”, Washington, D.C., 2 de diciembre [en línea] <https://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2011-12-02/representacion-politica-desigual-e-impuestos%2C9710.html>.
- Borjas, G. (2008), *Labor Economics*, Nueva York, McGraw-Hill.
- Buehn, A. y F. Schneider (2012), “Shadow economies around the world: novel insights, accepted knowledge, and new estimates”, *International Tax and Public Finance*, vol. 19, N° 1, Springer.
- Burr, J. A., J. T. Hartman y D. W. Matteson (1999), “Black suicide in US metropolitan areas: an examination of the racial inequality and social integration-regulation hypothesis”, *Social Forces*, vol. 77, N° 3, Oxford, Oxford University Press.
- Cáceres, L. R. (2017), “Desindustrialización y estancamiento económico en El Salvador”, *Revista CEPAL*, N° 122 (LC/PUB.2017/10-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- _____(2014), “Economía subterránea en América Latina”, inédito.
- Cáceres, L. R. y S. Cáceres (2017a), “Self-employment in Latin America”, *Journal of Developing Areas*, vol. 51, N° 3, Nashville, Tennessee, Universidad Estatal de Tennessee.
- _____(2017b), “Labor productivity and social policy in Latin America”, *Journal of Developing Areas*, vol. 51, N° 2, Nashville, Tennessee, Universidad Estatal de Tennessee.
- Cárdenas, M. (2010), “State capacity in Latin America”, *Documento de Trabajo*, Washington, D.C., Brookings Institution.
- Cárdenas, M. y D. Tuzemen (2010), “Under-investment in state capacity: the role of inequality and political instability”, *Documento de Trabajo*, Washington, D.C., Brookings Institution.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2016), *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2016* (LC/G.2698-P), Santiago.
- _____(2011), *Panorama Social de América Latina, 2010* (LC/G.2481-P), Santiago.
- Cerrutti, M. (2005), “Economic reform, structural adjustment and female labor force participation in Buenos Aires, Argentina”, *World Development*, vol. 28, N° 5, Amsterdam, Elsevier.

- Chetty, R. y otros (2014), "Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States", *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 129, N° 4, Oxford, Oxford University Press.
- (2011), "How does your kindergarten classroom affect your earnings? Evidence from project star", *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 126, N° 4, Oxford, Oxford University Press.
- Crutchfield, R. D. (1989), "Labor stratification and violent crime", *Social Forces*, vol. 68, N° 2, Oxford, Oxford University Press.
- Crutchfield, R. D., R. L. Matsueda y K. Drakulich (2002), "Race, labor, markets, and neighborhood violence", *Documento de Trabajo*, Seattle, Universidad de Washington.
- Crutchfield, R. D. y S. R. Pitchford (1997), "Work and crime: the effects of labor stratification", *Social Forces*, vol. 76, N° 1, Oxford, Oxford University Press.
- Cunha, F. y J. Heckman (2009), "The economics and psychology of inequality and human development", *NBER Working Paper*, N° 14695, Cambridge, Massachusetts, Oficina Nacional de Investigaciones Económicas.
- Currie, J. (2009), "Healthy, wealthy, and wise: socioeconomic status, poor health in childhood, and human capital development", *Journal of Economic Literature*, vol. 47, N° 1, Nashville, Tennessee, American Economic Association.
- Darity, W. R. y A. H. Goldsmith (1996), "Social psychology, unemployment and macroeconomics", *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 10, N° 1, Nashville, Tennessee, American Economic Association.
- Deming, D. J. (2011), "Better schools, less crime?", *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 126, N° 4, Oxford, Oxford University Press.
- Dooley, D. (2003), "Unemployment, underemployment, and mental health: conceptualizing employment status as a continuum", *American Journal of Community Psychology*, vol. 32, N° 1-2, Wiley.
- Easterlin, R. (1981), "Why isn't the whole world developed?", *The Journal of Economic History*, vol. 41, N° 1, Cambridge, Cambridge University Press.
- Gómez-Sabaini, J. (2006), "Cohesión social, equidad y tributación: análisis y perspectivas para América Latina", *serie Políticas Sociales*, N° 127 (LC/L.2641-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- González, I. y R. Martner (2012), "Superando el 'síndrome del casillero vacío': determinantes de la distribución del ingreso en América Latina", *Revista CEPAL*, N° 108 (LC/G.2549-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Junakar, P. N. (1991), "Unemployment and mortality in England and Wales: a preliminary analysis", *Oxford Economic Papers*, vol. 43, N° 2, Oxford, Oxford University Press.
- Klasen, S. (1999), "Does gender inequality reduce growth and development? Evidence from cross-country regressions", *Working Paper Series*, N° 7, Washington, D.C., Banco Mundial.
- Krivo, L. J. y R. D. Peterson (1996), "Extremely disadvantaged neighborhoods and urban crime", *Social Forces*, vol. 75, N° 2, Oxford, Oxford University Press.
- Krugman, P. y M. Obstfeld (1991), *International Economics*, Nueva York, Harper and Collins.
- Kubrin, C. E. y T. Wadsworth (2003), "Identifying the structural correlates of African American killings", *Homicide Studies*, vol. 7, Nueva York, SAGE Publications.
- Lichter, D. T. y D. Landry (1991), "Labor force transitions and underemployment: the stratification of male and female workers", *Research in Social Stratification and Mobility*, R. Althausen y M. Wallace (eds.), vol. 10, Greenwich, JAI Press.
- Loayza, N. (1997), "The economics of the informal sector. A simple model and some empirical evidence from Latin America", *Policy Research Working Paper*, N° 1727, Washington, D.C., Banco Mundial.
- Loayza, N. y J. Rigolini (2011), "Informal employment: safety net or growth engine?", *World Development*, vol. 39, N° 9, Amsterdam, Elsevier.
- Lora, E. (2012), "Las reformas estructurales en América Latina: qué se ha reformado y cómo medirlo (versión actualizada)", *Documento de Trabajo del BID*, N° IDB-WP-346, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Majlesi, K. (2016), "Labor market opportunities and women's decision making power within households", *Journal of Development Economics*, vol. 119, Amsterdam, Elsevier.
- Mckenzie, D. (2003), "How do households cope with aggregate shocks? Evidence from the Mexican peso crisis", *World Development*, vol. 31, N° 7, Amsterdam, Elsevier.
- Molina, E., A. Narayan y J. Saavedra-Chanduvi (2013), "Outcomes, opportunity and development: why unequal opportunities and not outcomes hinder economic development", *Policy Research Working Paper*, N° 6735, Washington, D.C., Banco Mundial.

- Molinas, J. R. y otros (2011), *Do Our Children Have a Chance?*, Washington, D.C., Banco Mundial.
- Pacheco-López, P. y A. P. Thirlwall (2008), "Has trade liberalization in poor countries delivered the promises expected?", *Documento de Trabajo*, Canterbury, Universidad de Kent.
- (2007), "Trade liberalisation and the trade-off between growth and the balance of payments in Latin America", *International Review of Applied Economics*, vol. 21, N° 4, Londres, Taylor & Francis.
- Parker, K. E. y M. V. Pruitt (2000), "Poverty, poverty concentration, and homicide", *Social Science Quarterly*, vol. 81, N° 2, Austin, University of Texas Press.
- Phillips, P. y B. Hansen (1990), "Statistical inference in instrumental variables regressions with I(1) processes", *Review of Economic Studies*, vol. 57, N° 1, Oxford, Oxford University Press.
- Pietrobelli, C., R. Rabellotti y M. Aquilina (2004), "An empirical study of the determinants of self-employment in developing countries", *LLEE Working Document*, N° 14 [en línea] http://economiaefinanza.luiss.it/dptea/files/LLEEWD14_JUNE_2004_0.pdf.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2014), *Human Development Report, 2014*, Nueva York, Naciones Unidas.
- Scartascini, C. y M. Tommasi (2009), "The making of policy: institutionalized or not?", *IDB Working Paper Series*, N° IDB-WP-108, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Sen, A. (1997), "Inequality, unemployment and contemporary Europe", *Revista Internacional del Trabajo*, vol. 136, N° 2, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Sen Gupta, A. (2007), "Determinants of tax revenue efforts in developing countries", *IMF Working Paper*, N° WP/07/184, Washington, D.C., Fondo Monetario Internacional (FMI).
- Sokoloff, K. L. y E. M. Zolt (2004), "Inequality and the evolution of institutions of taxation: evidence from the economic history of the Americas", *The Decline of Latin American Economies: Growth, Institutions, and Crisis*, S. Edwards, G. Esquivel y G. Márquez (eds.), Chicago, University of Chicago Press.
- The Washington Post* (2015), "Report: about one-third of dropouts go to work", 18 de abril [en línea] <http://www.pressreader.com/usa/the-washington-post/20150418/281754152855527>.
- Van Ewijk, C. y otros (2006), "Ageing and the sustainability of Dutch public finances", *CPB Special Publication*, N° 61, La Haya, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
- Whyte, W. F. (1985), "New approaches to industrial development and community development", *Industrial Democracy: Strategies for Community Revitalization*, W. P. Woodworth, C. Meek y W. F. Whyte (eds.), SAGE Publications.
- Wilson, W. J. (1987), *The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass and Public Policy*, Chicago, University of Chicago Press.

Anexo A1

Cuadro A1.1
Pruebas de raíz unitaria

Variable	Estadístico ADF
AGRIC	1,8690
MANU	2,2036
AGRIC+MANU	1,9504
REMY	2,1962
GDPGROWTH	3,5353
EXPCAY	3,1041
SEMPFEMALE	3,5900
SEMPMALE	4,4362
QUALITYWFEMALE	4,0768
QUALITYMLE	3,9318
TIEMPOPARCIALFEMALE	1,2115
TIEMPOPARCIALMALE	1,2408
ARANCELPROMEDIO	1,4525
INDICEGENERAL	1,4558
HOMICIDES	3,0399
ESTADODERECHO	3,5832
GENDERINEQUALITY	2,1483
GASTOSOCIAL	2,7822
REMITT	1,6296
ADOLESFERTILITY	1,7712
IOH	1,0271

Fuente: Elaboración propia.